

La izquierda chilena en 1982

Ricardo Yocelvezky R.

Introducción

La situación actual de la izquierda chilena aparece definida por dos rasgos fundamentales: 1] un proceso de división interna que afecta en mayor o menor medida a casi todas las organizaciones que la componen (que llega en algunos casos a los límites de la atomización de partidos o fracciones), y 2] intentos de las organizaciones, o sus fracciones, de agruparse en bloques que definan, estratégica o tácticamente, líneas de acción para enfrentar la dictadura imperante en Chile.

Las divisiones de los partidos políticos de la izquierda, y su lento proceso de reagrupamiento que permite perfilar bloques solamente embrionarios, plantean preguntas, problemas y, a veces, hasta conducen a la perplejidad no sólo de quienes están en contacto con las organizaciones políticas chilenas sino también de sus propios miembros.

El propósito de este artículo es describir, hasta donde sea posible, la situación orgánica actual de la izquierda chilena; buscar líneas de quiebre derivadas de la situación política nacional, que serían comunes a todas las organizaciones y, por otro lado, distinguir algunos de los intentos de respuesta que desde ellas se bosquejan, tratando de esclarecer sus determinantes más obvios. Esperamos con esto contribuir —aun cuando sólo sea en forma inicial— a una explicación del reagrupamiento en bloques, a partir de los cuales se ensaya la formulación de estrategias o tácticas alternativas.

El hecho más sobresaliente de los últimos tiempos es la posibilidad de distinguir dos bloques de partidos. Por una parte, los partidos Radical, Socialista (fracción Almeyda), Comunista y Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y, por otra, la Convergencia Socialista, bloque constituido por los partidos Socialista (fracción 24 Congreso), Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), MAPU-Obrero-Campesino y Partido Izquierda Cristiana. Imputar a estos bloques una significación que trascienda las declaraciones de las propias organizaciones involucradas requiere

caracterizar los componentes de cada bloque en formación y buscar en su evolución reciente la génesis de la situación actual.

Para hacer esta descripción, hemos dividido en tres partes este trabajo: 1] las tendencias distinguibles en la izquierda chilena durante el gobierno de la Unidad Popular hasta el momento del golpe de Estado; 2] la significación del golpe mismo y la dictadura instaurada a partir de él, así como las posibles consecuencias para las organizaciones de la izquierda, y 3] la situación actual, de conformación de bloques en esta misma izquierda, intentando una explicación de su origen y su contenido ideológico.

El eje de toda la exposición está centrado en una caracterización de los actores políticos y sus determinaciones más o menos inmediatas. De ésta se desprende la conclusión principal que sostiene la existencia de una insuficiencia teórica de los partidos para dar cuenta de su situación y de las posiciones que asumen en cada uno de los momentos considerados. A pesar de lo desalentador que es, en general, el cuadro presentado, la otra conclusión importante es la existencia de condiciones que permiten pensar como posible la superación de esta insuficiencia.

I. El complejo camino a la derrota

Las peculiaridades de la situación en que se originó, desarrolló y fue eliminado el gobierno de Salvador Allende plantean, aún hoy, la cuestión de su significado. En los términos más simplistas, se puede presentar así: el hecho de haber llegado al poder por la vía electoral una coalición de partidos con un programa que contempla explícitamente el comienzo de un proceso de transición al socialismo puede significar, y de hecho significó, cosas distintas para los diversos actores involucrados en el proceso.

¿Era esta situación el nacimiento de una vía alternativa al socialismo o se trataba sólo de un "accidente" que tendría que "normalizarse" en algún momento? Esta "normalización", ¿significaba que el tránsito al socialismo tendría que ajustarse al modelo históricamente prevaleciente (Unión Soviética, Cuba, etcétera)?

El equívoco comenzaba en el Programa de la Unidad Popular, donde la mención del término socialismo era producto de un acuerdo explícito entre las seis organizaciones componentes, que se reservaban la interpretación del significado que para cada una de ellas podía tener este término. Esto dejaba a la práctica del gobierno, es decir a la decisión de las cuestiones tácticas, la resolución de un desacuerdo estratégico implícito.

Existe una amplia bibliografía sobre la experiencia del gobierno de la Unidad Popular entre 1970 y 1973. Dentro de ella, aparecen más o menos claras dos posiciones: "reformismo" y "ultrismo", señaladas siempre en términos peyorativos ya que quien las caracteriza es el oponente y subentendiéndose que se oponen a "revolucionario" en cada caso. Sin insistir en este esquema simplista, lo utilizaremos para explicitar algunos de los pro-

blemas (dimensiones en que se definen estas posiciones polares-puras) que quedan implícitos en la discusión y que persiguen hasta hoy a los protagonistas. Esperamos que complicar el esquema de posiciones asumidas en el pasado nos acerque un paso a la comprensión del presente.

Si la meta estratégica era una nebulosa designada como "socialismo", las vías para alcanzarla aparecían medianamente claras. Un punto de quiebre a este respecto era el papel asignado al sistema institucional chileno y dentro de él, en especial, al mecanismo de representación social expresado en el sistema de partidos políticos. Nuestra consideración de este punto se centrará en los intereses de un cuadro de políticos profesionales, la mayoría de ellos con considerable experiencia, envueltos en un juego enmarcado por un sistema de representación con cuarenta años de funcionamiento, lo cual da a esta élite profesional de la política un conjunto de intereses comunes (tanto a los políticos de gobierno como a los de oposición). De la percepción que de éstos tengan los actores que definamos haremos depender las posiciones tácticas asumidas.

La posición rupturista

Una posición, que se asocia a la idea de "normalización" del proceso de tránsito al socialismo, es la que ve como necesaria la desaparición del sistema de partidos. El tipo más puro de esta posición incluiría dos aspectos de este proceso: desaparición del conjunto del sistema de partidos y fusión de las fuerzas que apoyaban al gobierno en un partido único. Sin embargo, queda por resolver qué es primero y cómo se desarrollará el proceso.

Si el objetivo táctico es la consolidación del poder del gobierno, las hipótesis acerca de cómo ocurrirá esto determinan las posiciones acerca de cómo organizar las fuerzas. El hecho de suponer que el sistema institucional era una traba para la consecución de este objetivo hacía necesario avanzar hacia su liquidación produciendo todos los hechos posibles que mostraran su no viabilidad. Esto pondría de manifiesto la necesidad de la reorganización de las fuerzas de la izquierda en el plano político, lo cual, a su vez, implicaría una renovación de los cuadros dirigentes ya que significaría un quiebre con la tradición y la cultura política asociadas con el sistema de partidos. Aunada con este análisis se encuentra, no necesaria pero sí mayoritariamente, la hipótesis del enfrentamiento armado.

Hacia esta posición confluyen, en general, los elementos (individuos y organizaciones) más recientemente incorporados a la actividad política. Las procedencias y características de este nuevo personal político son variadas, pero en su mayoría se explican por cuatro tipos de cortes que los separaban de la actividad política y que son eliminados con la llegada al gobierno de la Unidad Popular. En orden de importancia cuantitativa éstos parecen ser: 1] un corte generacional; 2] un corte en la importancia alcanzada dentro de los partidos participantes en el sistema; 3] un

corte que separa a la actividad política más o menos marginal (la ultraizquierda), y 4] un corte que separaba a algunos intelectuales del trabajo significativo en el aparato del Estado, manteniéndolos en ámbitos marginales, como la universidad por ejemplo. Esta caracterización nos parece útil para explicar, en general, las posiciones asumidas por organizaciones políticas como el MIR y MAPU, así como por algunos grupos y elementos individuales incorporados principalmente al Partido Socialista.

Al asumir el gobierno la Unidad Popular, incorporó un contingente considerable de personal en todos los niveles de la administración del Estado, incluso ampliando el campo de acción del personal del Estado a través de la política económica (constitución del área de propiedad social de la economía contemplada en el panorama de gobierno). Este personal tenía que ser reclutado entre la militancia de los partidos, lo cual dejó un hueco en los partidos mismos, en especial el socialista, que fue ocupado por militantes de las procedencias indicadas. Por otra parte, los cuadros que pasaban de los partidos a la administración del Estado aportaban una visión más ideológica de su función que la de los burócratas más o menos profesionalizados al servicio del gobierno. Por último, pero no lo menos importante, la actividad de masas creció inmensamente durante todo el período, dando una base de sustentación a los nuevos cuadros que se incorporaban a la actividad política y/o administrativa.

El MIR, organización marginal al sistema de partidos originada en 1965 y que había depurado sus filas hasta consolidar el predominio de las posiciones de tipo "castrista", alcanza durante el período 1970-1973 su mayor incorporación al sistema político a través de su apoyo al gobierno —sin participar en la alianza de partidos que constituye la UP— y de su capacidad para canalizar alguna parte de la nueva actividad de masas, aun durante la campaña electoral previa a septiembre de 1970 pero sobre todo a partir de las condiciones creadas por la presencia del nuevo gobierno. Es importante notar que el MIR, habiendo expresado antes de 1970 diferencias estratégicas con la izquierda tradicional (comunista y socialista), reduce, en la práctica, sus desacuerdos con el gobierno de la UP a cuestiones tácticas. Sin embargo, el MIR es el caso más puro de definición estratégica implícita que supone la "normalización" del proceso chileno a través de un enfrentamiento armado y la posterior adopción en el país de un modelo de transición al socialismo semejante al de Cuba.

El MAPU, nacido en 1969 a partir de una escisión del Partido Demócrata Cristiano y formado mayoritariamente por elementos provenientes del sector juvenil de ese partido, muestra algunos rasgos semejantes al MIR pero, dada su incorporación al sistema de partidos y su rápida evolución ideológica, presenta algunas complejidades que se reflejan en sus divisiones sucesivas. En poco más de dos años (1969-1971), en lo que va de su asamblea constitutiva a su primer congreso, el MAPU busca una nueva definición ideológica (dentro del campo del marxismo) y social (proletaria, por supuesto), abandonando la definición cristiana y pluriclasista que caracterizaba sus orígenes. Esto provocó un primer desprendimiento entre

los militantes del MAPU. Algunas figuras destacadas, de mayor edad y trayectoria dentro de la democracia cristiana y, por lo tanto, mejor integrados en el sistema político chileno, prefieren unirse a la izquierda cristiana, escisión de la democracia cristiana producida a mediados de 1971. De esta manera el MAPU adquiere algunas características que lo asemejan al MIR en su composición generacional y, parcialmente, en el terreno ideológico al recoger algunos elementos provenientes de la actividad marginal de ultraizquierda anterior a 1970 (en especial de origen maoísta). La tensión entre integración al sistema institucional (trayectoria anterior en la democracia cristiana e incorporación a la alianza de partidos en el gobierno) por un lado y, por otro, los requerimientos ideológicos que posibilitarían su consolidación como tercer partido obrero (pretensión que coloca al MAPU en competencia con el MIR) se expresa en la contradicción que produce la escisión de marzo de 1973, en MAPU (a secas, o Garretón, como es conocido en la primera etapa posterior a la división, por el nombre de su secretario general) y MAPU Obrero-Campesino (o Gazmuri, dirigente máximo de la fracción en la primera etapa posterior a la división). Es el predominio dentro del MAPU de la posición que está dispuesta a prescindir del sistema de partidos como mecanismo de representación social, lo que se refleja en el triunfo de Garretón en el II Congreso Nacional, a la vez que acelera la actividad fraccional, encabezada por Gazmuri, culminada por la división.

Este tipo de posiciones es importante también en el ámbito del Partido Socialista. Dentro de él existía una línea de pensamiento que recogía elementos de tradiciones preexistentes en la izquierda chilena a la formación del mismo Partido Socialista en los años treinta. A elementos residuales trotskistas e incluso anarquistas, se sumaba en los años sesenta una importante corriente inspirada por la experiencia cubana. Más aún, luego del triunfo electoral de 1970 el Partido Socialista se transforma en polo de atracción de una variedad de grupos de la franja marginal conocida como ultraizquierda, provenientes del MIR, del Partido Comunista, del maoísmo, etcétera. En esta situación, también es el Partido Socialista la organización que canaliza la parte más significativa de la nueva actividad de masas durante el período del gobierno de la Unidad Popular. El traslado a las funciones de gobierno de los cuadros mejor integrados en el sistema político crea una curiosa situación: el partido al que pertenecía el presidente Allende era la fuerza más importante en la crítica y la búsqueda de tácticas alternativas a la acción del gobierno.

Estos tres elementos, el MIR, el MAPU y este último complejo de corrientes y tendencias que coexisten dentro del Partido Socialista, conforman las fuerzas que pueden identificarse con una alternativa táctica que restaba importancia a la manutención del sistema institucional chileno. La posición más identificada con el gobierno, con Allende y con el proyecto representado por el programa de la Unidad Popular (sin olvidar sus ambigüedades) aparecía afirmada en la alianza Partido Comunista, parte del Partido Socialista y, de manera secundaria, en el Partido Radical, la Iz-

quierda Cristiana y el MAPU Obrero-Campesino, además de otras fuerzas menores y de existencia más bien coyuntural, como el API y la Social Democracia.

La posición institucional

No cabe duda de la importancia que, en el nivel táctico, tenía la preservación del sistema de partidos para esta posición que caracterizamos aquí en segundo lugar a pesar de haber sido la hegemónica durante todo el proceso. Se puede discutir, aun cuando resulte un poco superfluo, si esto constituía o podía constituir una línea estratégica. En todo caso, lo que posibilitó históricamente que todo esto ocurriera fue la inserción de los partidos socialista y comunista en el sistema de partidos como mecanismo de representación de la clase obrera y parte muy considerable del campesinado y las clases medias urbanas. Por razones de composición social y de conformación ideológica, el Partido Socialista aparece claramente como el mejor integrado de los dos al sistema de partidos y, en consecuencia, sus cuadros aparecen como más integrados a la élite política profesional del país.

El componente de clase media intelectual es más numeroso y más importante ideológica y orgánicamente en el Partido Socialista, lo cual no significa que ésta sea su caracterización completa. La importancia del apoyo electoral obrero, campesino y popular en general y el peso de la representación socialista en las organizaciones sindicales, lo ubican claramente como un partido de composición y representación de estos sectores.

El Partido Comunista, fuertemente enraizado en los sectores obreros con mayor tradición de organización y lucha, presenta algunas peculiaridades que hacen necesaria la relativización de su integración al sistema de partidos. En primer lugar, a pesar del uso que el partido hacía del prestigio que algunos de sus miembros alcanzaron en el ámbito de la cultura nacional (Neruda es el caso más célebre), la importancia de los intelectuales de clase media en el aparato de decisiones del partido es mucho menor que en el caso de los socialistas, aun para la mirada más superficial. Ligado a esto está el segundo aspecto de esta relativa independencia del Partido Comunista respecto al sistema de partidos: su fidelidad a los modelos ideológicos y orgánicos de la Unión Soviética, lo cual le permitió mantenerse prácticamente inalterable frente a las sacudidas sufridas por la izquierda y el movimiento comunista internacional en la década de los años sesenta. Frente al castrismo, en su época de desacuerdos con la Unión Soviética, el Partido Comunista chileno estuvo invariablemente con esta última y la disputa Moscú-Pekín produjo un desprendimiento de importancia bastante menor dentro del mismo. Sin embargo, la estrategia y táctica del Partido Comunista se centraban en su participación más plena en el sistema de alianzas de partidos que constituía el eje de funcionamiento del sistema político chileno.

La integración de comunistas y socialistas en el sistema de partidos y el largo proceso de unidad centrado en el eje constituido por ambos partidos como representantes legítimos, dentro del sistema político y en la sociedad, de la clase obrera y de otros sectores populares, fundamentalmente campesinos y pobres urbanos (populares), son la clave de la constitución de la Unidad Popular y de su triunfo electoral. Sin embargo, este mismo papel protagónico de ambos partidos y la situación de negociación dentro de las reglas del sistema introduce la ambigüedad estratégica que caracteriza al proyecto de la Unidad Popular y que da lugar a las diferencias tácticas que se analizan.

La pregunta que nos parece central es: ¿hasta qué punto la centralidad del eje comunista-socialista en la Unidad Popular representa la probabilidad histórica de la hegemonía de la clase obrera en la conducción de un proceso que dice, en general, buscar su meta en el inicio de la transición al socialismo? Visto lo mismo desde el ángulo de la situación política concreta, la pregunta sería si el sistema de alianzas de partidos que hizo posible el acceso al gobierno posibilitaría también el desarrollo del proyecto o sería una traba para éste. A esta cuestión táctica buscaban dar respuesta las posiciones caracterizadas y las fuerzas que hemos asociado a ellas.

Desde el punto de vista de la "autoridad moral", si es que existe algo que se pueda llamar así en política, todo indicaría que la opción táctica por la liquidación del sistema institucional, y por el remplazo de los cuadros más tradicionales y mejor integrados a ese sistema en la dirección de las fuerzas populares, estaría representada por elementos inestables, de menor integración al sistema de representación social, lo cual es sin duda así. Sin embargo, a pesar de algunas volteretas ideológicas sorprendentes, observables durante el período del gobierno de la Unidad Popular, no se puede olvidar que las posiciones ideológicas que fundamentan esta opción táctica y algunas de las fuerzas y elementos individuales que las sustentan preexisten a la formación de la Unidad Popular.

Si bien es cierto que estas tendencias y fuerzas crecen debido al incremento de la actividad política de masas que tiene lugar en las condiciones creadas por el propio gobierno de la Unidad Popular, no se puede olvidar que si la opción táctica representada por estas fuerzas permanece más bien nebulosa es porque su definición tiene forma negativa, rechazo del sistema institucional. Además, las formas nuevas de organización de la representación social y de la acción política, incluyendo la posibilidad de la lucha armada, nunca alcanzaron un desarrollo más que embrionario. Al respecto, es indispensable considerar dos hechos: 1] los partidos siguieron siendo el mecanismo fundamental de organización y representación, y 2] esta posición, como alternativa táctica, sólo representó un desafío coyuntural a la hegemonía del gobierno, conductor del proceso y del bloque político que lo apoyaba. Así, en la discusión de la legitimidad de esta posición debe considerarse su relación con la posición alternativa dentro de la izquierda en dos momentos, en el inicio y en el fin del proceso.

La Unidad Popular. ¿Estrategia o táctica?

Si bien al comienzo del proceso, 1969-1970, en el momento de las negociaciones para la constitución de la alianza de partidos y la confección del programa común, quienes buscaban alternativas ajenas al sistema de partidos eran poco significativos en el conjunto del sistema político, su presencia era lo bastante fuerte en el panorama nacional como para pesar en el ánimo de los negociadores. Fuera de los partidos que participaban en las negociaciones, el MIR y otros grupos de tendencia castrista, maoísta o trotskista, buscaban formas alternativas de acción que se tradujeran en hechos políticos producidos desde fuera del sistema, tanto en la línea de acción de masas, alcanzando su máxima expresión en el movimiento de pobladores, como en la línea de propaganda armada, que culmina en ese período en las acciones de expropiación (asaltos a bancos, supermercados, etcétera). Dentro de los partidos, especialmente en el Partido Socialista, existían corrientes muy próximas a estas posiciones, las cuales se habían visto involucradas en acciones dentro de esta línea en el movimiento campesino y de pobladores, y habían logrado en congresos del Partido Socialista la aprobación de tesis que al menos no descartaban la lucha armada como vía de acceso al poder, a la cual, eventualmente, podría tener que recurrir la clase obrera chilena.

¿Cómo pesó esta presencia política en la constitución de la alianza de partidos que constituyó la Unidad Popular, diseñó su programa de gobierno y designó a Salvador Allende como su candidato presidencial? Si se piensa en la composición social y partidaria de la Unidad Popular, ésta no representaba una novedad absoluta dentro del sistema político chileno. Los tres partidos principales que componían la alianza (radical, socialista y comunista) habían estado ya reunidos en el Frente Popular de 1938. Las diferencias más notables, entre muchas otras, residían en que, esta vez, el candidato pertenecía al Partido Socialista y no era un radical como en 1938. Esto era no sólo un indicador de las diferencias en cuanto a la importancia relativa de los componentes de esta nueva alianza sino también de una más importante: el programa de gobierno. Por primera vez se aceptaba que la meta de un gobierno apoyado por tales fuerzas políticas sería las de iniciar la transición al socialismo. Este programa representaba una radicalización aun con respecto al programa presidencial del Frente de Acción Popular (FRAP), que en 1964 había postulado también a Salvador Allende sobre la base de una alianza socialista-comunista, que no contaba con el apoyo de ninguna fuerza política significativa que representara a las clases medias, como el Partido Radical.

Desechar la opción de constituir un frente popular implicó desechar, al menos, dos alternativas: 1] una alianza con la democracia cristiana, dentro de la cual existía la idea de profundizar el reformismo de la administración de Frei (1964-1970) a través de una alianza con la izquierda que apoyara a su candidato presidencial, R. Tomic; 2] constituir la Uni-

dad Popular como alianza para apoyar a un candidato radical (Alberto Baltra) que representara una visión más moderna que la tradicionalmente representada por el Partido Radical, que pusiera el acento en el desarrollismo económico y se inclinara hacia las posiciones de la socialdemocracia europea.

El hecho de que comunistas y socialistas rechazaran estas alternativas no quiere decir que dentro de ambos partidos no hubiera habido partidarios de ellas. Sin embargo, entre otras consideraciones de cualquier tipo, se puede suponer que ambos partidos tuvieron en cuenta que era previsible, a partir de la constitución de una alianza de tipo frente-populista, la probabilidad de un fortalecimiento de la izquierda fuera del sistema de partidos (cuyo polo de agrupamiento sería sobre todo el MIR) y un debilitamiento del Partido Socialista que podría, eventualmente, conducir a su división.

Las características del programa (mención de la transición al socialismo como meta), del candidato (no sólo un socialista sino Salvador Allende) y el acuerdo sobre el estilo de conducción de la campaña (que asegura que no se intentará desviar la creciente actividad de masas observable en el país en función de objetivos puramente electorales, tal como habría ocurrido en 1964), hace pensar que la alternativa representada por quienes no valorizaban mucho el sistema institucional pesaba en el ánimo de quienes negociaron y tomaron estos tres acuerdos que representaron las bases fundamentales de la constitución de la Unidad Popular.

El efecto de todo esto fue establecer una dirección hegemónica de la campaña, y luego del gobierno de la Unidad Popular, no sólo sobre la alianza misma sino sobre el conjunto de la izquierda chilena. En esta descripción de la situación se ha tenido cuidado hasta aquí en subrayar que las fuerzas caracterizadas como contrarias a la manutención del sistema institucional buscaban alternativas *tácticas* frente a la dirección representada por el gobierno de la Unidad Popular. Se debe recalcar que ya desde la campaña electoral no se vuelven a expresar alternativas estratégicas, lo cual es en particular importante en el caso del MIR, que aparentemente renuncia a la discusión con la Unidad Popular en ese plano y, sin formar parte de la alianza de partidos ni del gobierno, brinda su apoyo expectante, buscando diseñar tácticas que, supuestamente dirigidas a lograr los objetivos expresados en el programa de gobierno, prevean la eventualidad del enfrentamiento armado y no dependan de la mantención del sistema institucional.

A pesar de todo lo dicho, hay que señalar que los tres años de gobierno de la Unidad Popular permitieron a estas posiciones ganar terreno en términos de apoyo de masas y de influencia tanto dentro del gobierno como de los partidos que lo apoyaban, por lo cual, si al comienzo del proceso su presencia pesaba, al final sus posiciones tenían voceros presentes en los órganos de dirección.

Para examinar el punto de vista del gobierno existe una dificultad fundamental representada por la necesidad de imputar a su acción una de

dos posiciones respecto de la manutención del sistema institucional. La pregunta en este caso es si el encuadrar la acción del gobierno y de las direcciones políticas que lo apoyaban dentro del marco institucional dado obedecía a un diseño estratégico o era simplemente un recurso táctico. Lo más probable es que ambas posiciones tuvieran representantes entre quienes aparecían, en conjunto, opuestos a las acciones que debilitaban el funcionamiento de los organismos y canales tradicionales del sistema político chileno. Es decir, entre quienes apoyaban al gobierno, y a su esfuerzo por realizar los cambios prescritos en su programa sin desbordar los cauces institucionales del sistema político, había quienes lo hacían pensando que éste era un nuevo camino hacia un socialismo distinto al conocido hasta entonces y también quienes pensaban que, siendo imposible una nueva vía al socialismo (ni pensar en un socialismo distinto), cualquier ruptura del sistema institucional resultaría en una derrota del gobierno y de la Unidad Popular y, por lo tanto, la supervivencia del gobierno dependía de la supervivencia del sistema.

Cualquiera que sea el razonamiento que imputemos a los sectores que apoyaban la línea táctica hegemónica, es decir la del gobierno, el Partido Comunista, parte del Partido Socialista, el Partido Radical y el MAPU obrero-campesino, en la práctica obedecen todos a la caracterización de reformistas aplicada a ellos en conjunto por los representantes de la posición rupturista que hemos caracterizado más arriba. Intentaremos aclarar lo complejo y confuso de la situación en el momento del desenlace del proceso, examinando algunos problemas coyunturales que exigían decisiones tácticas, buscando relacionarlos entre sí y mostrando cómo la posición respecto a la ruptura o mantención del sistema de partidos es un eje que permite reconstruir con alguna coherencia posiciones que, en su momento, se enfrentaron dentro de la izquierda chilena de manera aparentemente caótica.

El problema planteado a las alturas de 1973 era la supervivencia del gobierno y las perspectivas de su programa. La evaluación del apoyo al gobierno era un primer punto de quiebre entre las dos posiciones. La trayectoria del apoyo expresado dentro del canal tradicional del sistema político, el apoyo electoral, resultaba satisfactorio en comparación con la trayectoria del apoyo electoral a gobiernos anteriores. Si bien la curva adoptaba una forma semejante, crecimiento del apoyo inmediatamente después del triunfo en las elecciones presidenciales de 1970 (expresado en el triunfo de la Unidad Popular en las elecciones municipales de abril de 1971), para luego caer, reflejando así el desgaste del gobierno (caída del apoyo a la Unidad Popular en las elecciones parlamentarias de marzo de 1973), la caída era, en el caso del gobierno de la Unidad Popular, menor que la observada en los gobiernos anteriores, lo cual reflejaba un mayor apoyo para un proyecto como el de este gobierno que para un gobierno cualquiera, aun cuando no escapaba al proceso de desgaste que su acción provocaba. Una consideración adicional es que la particularidad del sistema electoral (que estipulaba duraciones distintas para los man-

datos municipales, parlamentarios y presidencial, con el fin de que no coincidieran dos elecciones de distinto tipo en un mismo año) había jugado una mala pasada a la Unidad Popular al seguir una elección municipal en lugar de una parlamentaria a la presidencial. Si el apoyo obtenido por el gobierno en 1971 se hubiera reflejado en el parlamento y no en las municipalidades, como ocurrió, el margen de maniobra dentro del sistema institucional disponible para el gobierno y para la Unidad Popular habría sido mucho mayor. Al gobierno le quedaba aún el recurso al plebiscito pero éste no fue usado. Todavía se discute si no hubiera sido una salida a la situación el llamar a plebiscito y cuál debería haber sido el mejor momento para ello en los tres años.

A esta evaluación del apoyo electoral al gobierno se agregaba la consideración de los crecientes niveles de organización y movilización de masas entre los sectores populares. Esto era provocado y facilitado por varios factores, entre los cuales era muy importante la presencia del gobierno mismo y su programa, pero a los que hay que agregar la formación del Área de Propiedad Social de la Economía (que colocaba a un número creciente de trabajadores como dependientes del Estado) y la acción entre los sectores populares de los partidos de la Unidad Popular y otras organizaciones como el MIR que, actuando desde fuera del sistema de partidos, lograron su mejor nivel de apoyo en este período.

Parecía haber consenso entre todas las fuerzas de izquierda sobre la caracterización social de la situación de fuerzas. Tanto el más lento desgaste del apoyo al gobierno, respecto de administraciones anteriores, como la creciente actividad política de masas estarían indicando un sólido apoyo popular. El desgaste del apoyo electoral se atribuía principalmente al alejamiento de sectores de clase media. Esto planteaba el problema de diseñar una táctica para la supervivencia del gobierno que tomara la forma de una alianza con los sectores medios que, al incorporarlos, ampliara la base de apoyo al gobierno y aislara a los representantes políticos de la oposición.

En el terreno político, la cuestión discutida de manera explícita era la de una alianza con la democracia cristiana. Ciertamente en esa línea tenía prioridad la conservación del sistema de partidos, ya que era éste el punto de partida, y único terreno en el que se podían definir intereses comunes entre la Unidad Popular y la democracia cristiana, vista como representación política de las clases medias. La posición alternativa, en su versión extrema, rechazaba la alianza política ("avanzar sin transar") proponiendo basar el apoyo al gobierno en la movilización de masas. Esto último suponía algunas consecuencias no del todo claras ni explícitas:

1] Las relaciones que se establecieran entre los nuevos organismos de masas (cordones industriales, comandos comunales, etcétera) y los partidos de la izquierda, redefinirían: a] las relaciones entre estos partidos y las masas, lo cual era ya parte de una redefinición de la relación entre el sistema de partidos en su conjunto y la sociedad, y b] las relaciones entre

partidos (y, en consecuencia, entre los tipos de personal político que hemos caracterizado) dentro de la izquierda.

2] Si bien, como ya hemos dicho, la hegemonía del gobierno y de las organizaciones que pretendían mantener la acción dentro de los cauces del sistema institucional no fue remplazada en ningún momento, se encontraba hasta cierto punto cuestionada, en la medida que los nuevos organismos y formas de movilización de masas se habían legitimado a través de su acción y de haber, con ello, forzado a participar, en alguna medida, dentro de ellas a los partidos más relevantes de la Unidad Popular.

3] El sector que actuaba dentro del sistema de partidos, cuya posición de conductor del proceso no estaba amenazada de manera inminente, veía sin embargo dificultada su tarea de negociación por la gran autonomía con que contaba el otro sector para producir hechos políticos al margen del sistema, y que cuestionaban al sistema mismo.

4] Puestas ya estas corrientes en el terreno crítico para la supervivencia del gobierno, el de la actitud de las fuerzas armadas, sus posiciones parecían deducirse automáticamente de su consideración del sistema institucional como un todo: a] el sector del gobierno y los partidos y cuadros mejor integrados al sistema se adherían a una línea que esperaba enrolar a las fuerzas armadas en la defensa del sistema institucional ante los ataques de la oposición dirigidos a minarlo, impedir su funcionamiento y, finalmente, liquidarlo, y b] el sector partidario de avanzar al margen del sistema parecía tener esperanzas de que las fuerzas armadas sufrirían el mismo proceso de descomposición observable en las instituciones políticas.

Consecuentemente, los unos, en particular el mismo presidente Allende, orientaron de preferencia su acción hacia lograr el apoyo de los mandos institucionales, en tanto los otros, el MIR en especial, buscaban contactos entre la tropa e incluían a los soldados y marineros como destinatarios de sus proclamas al pueblo en general.

En esta situación sobrevino el desenlace del proceso. Hemos tratado de describir las posiciones prealecientes en la izquierda y de relacionarlas con intereses políticos de los cuadros que las representaban. Por cierto, no entramos en la discusión de a quién se debe atribuir la derrota, discusión que, hasta donde se dio entre los derrotados, será examinada más adelante.

II. Los significados del golpe de Estado y la dictadura

Los sucesos que rodean al golpe de Estado de septiembre de 1973 oscurecen en parte su significación. El asesinato del presidente Allende, la represión masiva, la brutalidad desplegada, etcétera, conforman una imagen del golpe y la dictadura que ha influido en su caracterización política. La distancia y el tiempo proporcionan ciertas ventajas, y también algunas desventajas, para mirar de nuevo los acontecimientos y buscar su signifi-

cado, con particular atención en las consecuencias para la izquierda de la del proceso político inaugurado por el golpe, buscando definir los problemas teóricos y prácticos que éstos plantean a la izquierda chilena.

El significado militar. No hay duda de que el enfrentamiento militar fue casi inexistente. La derrota fue fulminante y la resistencia, puntual y aislada en algunos focos, debe ser analizada para separar la significación simbólica, política e ideológica de la significación militar.

La rapidez de la victoria de los golpistas y la escasa resistencia que encontraron revelan el fracaso indiscutible de las dos políticas militares definidas en el apartado anterior. Ni se contó con el apoyo de mandos institucionales, más que aislados y simbólicos, ni la tropa desobedeció a los oficiales en ninguna medida que dificultara las operaciones en niveles dignos de consideración. En ambos casos se podría quedar satisfecho con una crítica que reprochara la ineficiencia de quienes decían estar trabajando en una u otra línea, lo cual agotaría la discusión antes de plantearse el problema más importante.

Las características de la derrota militar sufrida por la izquierda a manos de las fuerzas armadas tienen importancia en la definición del carácter de la dictadura en, al menos, tres aspectos: el militar, el político y el ideológico. La victoria militar en una guerra interna nunca puede ser completa. No es posible la destrucción de un enemigo político en el terreno militar en tanto este enemigo tenga raíces en algún sector relevante de la sociedad. Es claro que las circunstancias del enfrentamiento militar y su definición tienen influencia sobre el carácter de la situación en que se encuentran tanto vencedores como vencidos después de consumado el enfrentamiento. Por ejemplo, si Salvador Allende y los cuadros dirigentes de la izquierda se hubieran rendido ante la sola amenaza de los golpistas, la derrota política e ideológica de la izquierda hubiera sido mucho más grave pues habría debilitado los lazos de las organizaciones políticas con sus bases sociales, que habrían tenido el derecho de dirigir una crítica amarga a quienes los condujeron a la derrota y los abandonaron en el momento decisivo. Ciertamente no fue esta la situación en septiembre de 1973.

La ineficacia de la resistencia militar de la izquierda contribuyó a acrecentar su valor simbólico y su contenido político e ideológico. Si bien la legitimidad de las direcciones de izquierda no salió incólume del enfrentamiento, no hay duda de que, hasta hoy, no ha desaparecido del todo. En el terreno ideológico, la victoria de los golpistas encuentra un límite aún más importante. Al no poder separar de sus bases a la izquierda, la muleta rota del nacionalismo no les ha permitido avanzar ni un paso en tanto resulta una pura fórmula retórica al no apuntar a ninguna acción concreta de la dictadura que no sea la represión a los sectores populares. Sin embargo, estas limitaciones políticas e ideológicas de la victoria militar contribuyen a reafirmar el carácter militarista, represivo y autoritario de la dictadura. Al bloquearse el avance en los terrenos político e ideológico, se hace necesario reproducir cotidianamente la derrota de un enemigo al cual, a pesar de todo, no se puede destruir en el sentido de lograr su eliminación. La repre-

sión continua y permanente muestra, junto con otros elementos que reseñaremos más adelante, la limitación de la victoria militar de los golpistas.

Más allá de la severidad con que se quiera criticar la eficiencia de los cuadros políticos de la izquierda en ambas posiciones, es necesario enjuiciar las políticas militares que proponen a la luz de sus resultados y los desarrollos posteriores. Porque el fracaso no es lo único que ambas tienen en común. El desarrollo de la dictadura y su consolidación revelan que la consideración del aparato armado del Estado como puramente institucional es errónea. Ya hemos dicho que las políticas respecto de las fuerzas armadas se desprendían, para ambos sectores de la izquierda, de sus posiciones respecto del sistema institucional en su conjunto, lo cual revela que, en su visión, cada una de estas posiciones hacía depender a las fuerzas armadas del destino del sistema. En un caso se trataba de su descomposición como elemento necesario para abrir la posibilidad de eliminar el sistema político y, en el otro, de mantener el sistema político para evitar la intervención de la fuerza en su defensa. Lo que ocurrió es que la fuerza armada no se descompuso institucionalmente y sí intervino para terminar de destruir el sistema institucional e intentar su refundación a partir de la dominación desnuda bajo la forma de represión masiva. Si no en sus aspectos teóricos, este problema aparece planteado con urgencia en sus aspectos prácticos, bajo la forma de necesidad de definir una política militar de oposición a la dictadura, problema que ocupa un lugar importante en la reubicación de las fuerzas de la izquierda chilena en la actualidad, tal como se verá más adelante.

El significado político. No hay duda de que el hecho político central constituido por el golpe de Estado es la derrota de la izquierda chilena, el derrocamiento del gobierno de la Unidad Popular y la interrupción del proceso político orientado por el programa de ésta. Sin embargo, todo esto no agota el significado político del golpe y la dictadura que a partir de éste se instaura en Chile.

En el nivel más general, el golpe de Estado marca la liquidación del sistema político ordenado jurídicamente por la constitución de 1925 y vigente desde 1932. Esto significa la liquidación del sistema de partidos que articulaba al Estado y la sociedad chilena y, en particular, la eliminación de los políticos profesionales como representantes de los intereses e ideologías vigentes. El significado que esto tuvo para cada una de las fuerzas políticas es distinto. Es necesario aproximarse a ellos para entender algunas de las posiciones que se han venido asumiendo a partir de entonces.

Dejando a un lado, por el momento, la derrota de la izquierda, lo más importante que queda es la derrota sorpresiva de quienes se contaban en el bando triunfante, los demócrata cristianos. Es cierto que algunos sectores del Partido Demócrata Cristiano reaccionaron condenando el golpe de Estado en los primeros días luego de que éste tuvo lugar. Sin embargo, no era éste el sector hegemónico dentro del partido ni el que lo había conducido a la alianza con la derecha en la que lo encontró el golpe. En este sentido, este sector de la democracia cristiana que percibía sus intereses

políticos como más cercanos a la izquierda había sido derrotado dentro de su propio partido antes. Lo que se debe evaluar es hasta dónde fue una sorpresa el carácter de la dictadura militar para el otro sector de la democracia cristiana, para el sector hegemónico en ella, liderado por Eduardo Frei y aliado a la derecha y a su estrategia opositora al gobierno de la Unidad Popular.

Descartamos desde la partida la hipótesis de que Frei y su sector de la democracia cristiana hayan podido ser sorprendidos por el hecho mismo del final violento de la experiencia del gobierno de Allende. Si bien se debe suponer inocencia en ausencia de pruebas, en este caso sería necesario suponer ingenuidad y nadie parece estar dispuesto a acusar a Frei y a sus amigos de ingenuos. La cuestión se reduce, entonces, a saber si el carácter del gobierno militar fue o no una sorpresa para ellos. Hay bases objetivas para imputar a Frei, a su sector y a la democracia cristiana bajo su dirección, la intención de aceptar un golpe de Estado de carácter restaurador. Es decir, una intervención militar que eliminara al gobierno de Allende y creara las condiciones para la reconstitución del sistema político, previo establecimiento de las garantías necesarias para evitar la repetición del triunfo de la izquierda. En una situación así, Frei personalmente, y su partido, aparecerían como la mejor opción de reconstrucción del sistema político ya que contarían con el apoyo de los sectores de izquierda que hubieran aprendido la lección de la violencia y con la base social de la izquierda que no tendría otra expresión política disponible.

El error de Frei, si lo hubo, habría estado en su evaluación de las intenciones y el carácter de sus aliados, la derecha. En apariencia estas fuerzas políticas que representaban a la clase dominante luchaban por el restablecimiento de la normalidad institucional, alterada por la acción del gobierno de la Unidad Popular y las movilizaciones de masas que apoyaban o acompañaban esta acción. Tras este programa político, centrado en el cuestionamiento de la legalidad de las acciones del gobierno en todos los terrenos, la oposición unida (Partido Nacional y democracia cristiana) enfrentó las elecciones parlamentarias de 1973. En ellas se frustró su última oportunidad de detener al gobierno (o incluso destituirlo) por los canales institucionales. A partir de allí tenía sólo dos opciones: 1] esperar la próxima elección presidencial (1976) o 2] actuar al margen del sistema institucional y derrocar al gobierno por medio de la violencia. Sin embargo, esta situación no autoriza a pensar que el recurso a la fuerza haya sido una acción precipitada ni tampoco producto del deterioro de la situación política en unos pocos meses. Aclarar esto requiere una breve consideración de la oposición en su trayectoria durante el periodo 1970-1973, y de sus componentes en su conformación anterior al triunfo electoral de la izquierda en 1970.

EXCURSUS: *la estrategia del golpe de Estado*

Se puede discutir si en 1970 el sistema político chileno estaba en crisis, si el triunfo electoral de la izquierda fue producto de esa crisis o si, en cam-

bio, es este triunfo el que provoca una crisis. De cualquier manera que se evalúe esa situación, lo cierto es que el sistema mostraba cambios importantes cuyas consecuencias no vinieron a quedar del todo claras hasta 1973. En 1970 Frei dejaba la Presidencia de la República habiendo gobernado seis años con el apoyo prácticamente único de su propio partido, la democracia cristiana. Su triunfo en 1964 se había producido con el apoyo de la derecha tradicional, liberales y conservadores, quienes ante el peligro de un triunfo de la izquierda, con Allende como candidato, pusieron incondicionalmente su fuerza electoral tras el candidato de la democracia cristiana. Las consecuencias de esto y el triunfo demócrata cristiano en las elecciones parlamentarias de marzo de 1965, que le dio al gobierno 81 diputados sobre 147, se manifestaron en el debilitamiento de los órganos políticos tradicionales de la clase dominante, los partidos liberal y conservador. La liquidación de estos partidos fue producto, en definitiva, de las transformaciones que el gobierno de Frei emprendió en el sector rural. La reforma agraria y la organización sindical de los trabajadores del campo tuvieron el efecto político de eliminar la base de sustentación, dentro del sistema político, de liberales y conservadores.

Si bien la burguesía agraria chilena no era una pieza fundamental en tanto poder económico, dada la decadencia del sector agrario nacional, seguía teniendo una importancia considerable en términos económicos y primordial en el terreno social y político. Desprender de la crisis de la agricultura la importancia de la clase propietaria rural era un error, ya que ésta no se encontraba aislada de los sectores industriales, comerciales y financieros. Por el contrario, sus conexiones eran más importantes para el análisis político que las consideraciones que se pudieran hacer partiendo de la definición de fracciones de clases a partir de fracciones sectoriales del capital. En el terreno social, los terratenientes más tradicionales, constituidos en aristocracia, seguían detentando y administrando el acceso a la cúspide de la pirámide del prestigio social. En el terreno político, la imposibilidad legal, en la práctica, de la organización de los trabajadores rurales daba a los terratenientes el control del voto en esas zonas. A esto se debe sumar la sobrerrepresentación del sector en el parlamento, debido a que la distribución geográfica de asientos parlamentarios se hacía de acuerdo con la distribución de la población en los años treinta de este siglo y no consideraba la migración ni la urbanización de los últimos cuarenta años.

El cálculo demócrata cristiano, al aplicar sus programas de reforma agraria y sindicalización campesina (enmarcados ambos en un proyecto de modernización global inspirado tanto en el desarrollismo propio de la visión de Chile y América Latina contenidos en la ideología del partido, como en el programa de Alianza para el Progreso, que les proporcionaba el apoyo político y económico de Estados Unidos), era correcto en cuanto se refería al debilitamiento de la base electoral que sustentaba el poder político de la clase dominante. Sin embargo, si los demócrata cristianos contaban con transformarse ellos en representantes de la burguesía más moderna (industrial y financiera) y con capitalizar la clientela electoral campesina, fallaron

en ambos pronósticos. Esto se explica, en parte, al examinar la evolución de la derecha durante el gobierno de Frei y, más tarde, como oposición al gobierno de Allende.

El carácter de la representación política de la clase dominante cambió de manera radical entre 1964 y 1973. Sólo señalaremos aquí los rasgos centrales de ese proceso. El Partido Nacional, fundado en 1966 como fusión de liberales y conservadores, no es un simple reagrupamiento de dos fuerzas tradicionales debilitadas electoralmente. Entre sus cuadros dirigentes se hace notorio el cambio de los viejos políticos tradicionales por dirigentes llegados de la franja marginal de actividad de ultraderecha, que subsistía azarosamente desde la década de los años treinta, cuando el nazismo criollo intentó un *putch* y fue masacrado de modo inmisericorde, inspirados por distintas variantes del fascismo europeo y bajo el rótulo general del nacionalismo. De hecho, el nombre de "Nacional" fue tomado del grupo Acción Nacional, dirigido por Jorge Prat.

Existe una cierta simetría con la situación que hemos descrito en la izquierda. La incorporación de nuevos cuadros y grupos en la derecha plantea también el conflicto entre los que pretenden eliminar el conjunto del sistema político institucional y los que buscan mantener su acción dentro de los cauces prescritos por éste. La diferencia más importante, sin embargo, es que en la derecha la posición rupturista con el sistema gana terreno con mucha rapidez. Esto se debe al debilitamiento de los partidos tradicionales, como producto de la pérdida de control de su base electoral tradicional, los campesinos desorganizados. La búsqueda de una base electoral de apoyo alternativa los conduce a renovar los cuadros, incorporando fascistas de viejo y nuevo cuño, quienes aportan una ideología nacionalista dirigida a obtener el apoyo de las clases medias, en especial los sectores independientes, no burocratizados, de éstas. La idea de movilizar políticamente a las capas medias plantea el problema de su encuadramiento en un modelo orgánico que canalice esta movilización. Esto se resolvió utilizando los agrupamientos de carácter corporativo (cámaras de industria y comercio y colegios profesionales) e incluyendo la extensión de la acción política de esta nueva derecha hacia la corporación más poderosa, las fuerzas armadas.

Todos estos desarrollos eran visibles antes de 1970. Sin embargo, aparecían oscurecidos por la participación del Partido Nacional en el sistema de partidos, como si no fuera más que el remplazo de los dos partidos principales fusionados en él, y por la campaña del candidato Jorge Alessandri para la elección presidencial en 1970. A pesar de estos procesos "normales" había signos claros de los cambios que hemos destacado. La renovación de los cuadros de la derecha y, en particular, el pasado fascista de algunos de los nuevos dirigentes, había sido denunciado por la prensa de la izquierda. El carácter de intento de golpe de Estado del movimiento dirigido por el general Viaux en 1969 (el "tacnazo") fue oscurecido con ayuda de parte de la izquierda que aceptó la definición de "gremial" del movimiento una vez que éste fue derrotado. Por último, la reactivación de los gremios patronales antes de 1970 y la presencia de cuadros de antecedentes fascistas po-

dían hacer pensar que el centro de diseño de la estrategia política de la derecha había sido trasladado fuera del sistema de partidos.

Encuadrar todos estos síntomas para percibir una corriente que trabajaba por la destrucción del sistema institucional puede haber sido imposible antes de 1970. La reactivación de los gremios patronales comenzó con la oposición a la reforma agraria por parte de las organizaciones de terratenientes, y esto podía pasar como un hecho "natural". En los gremios de industriales y comerciantes se produjeron algunos enfrentamientos entre los demócrata cristianos y la derecha durante el gobierno de Frei, lo cual hacía pensar más bien en una penetración de los partidos en los gremios, antes que en un remplazo del partido por los gremios una vez que la derecha derrotó a la democracia cristiana en la mayoría de ellos. Sin embargo, es claro que el triunfo de Salvador Allende en 1970 colocó en situación de crisis a la derecha y ésta reaccionó buscando canales de acción opositora fuera del sistema político.

La oposición derechista al gobierno de la Unidad Popular desarrolla una línea de acción de masas centrada en la movilización de sectores de clase media organizados fuera del sistema de partidos políticos. Su principal vocero, el diario *El Mercurio*, llama a esto "poder social", entendiendo por tal las organizaciones de vecinos, amas de casa, profesionistas y gremios empresariales. Otra forma de acción al margen del sistema institucional asumida por la derecha es la acción terrorista organizada por distintas bandas de orientación fascista, que algunas veces tratan de hacer aparecer como responsable de sus atentados a la izquierda pero que, con el correr del tiempo, van legitimando su existencia y actividades ante los sectores de la derecha más tradicional.

La alianza opositora que dentro del sistema de partidos forjan la democracia cristiana y el Partido Nacional va perdiendo importancia en tanto no logra su objetivo fundamental: la destitución del gobierno por medios constitucionales o, al menos, la paralización de su acción transformadora. Sin embargo, conserva su presencia en tanto legitima la acción opositora fuera del sistema de partidos cuestionando la constitucionalidad y legalidad de las medidas adoptadas por el gobierno. Al igual que en la izquierda, como observamos antes, el sector que actúa desde fuera del sistema institucional va ganando terreno en la medida que, por su misma ubicación y posiciones respecto del sistema, cuenta con mayor libertad de iniciativa para producir hechos políticos, ya sea en el terreno de la acción de masas o en el del terrorismo.

Una vez probada la ineffectividad de la oposición dentro del sistema en las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, el papel de ambos partidos se limita a legitimar las acciones dirigidas a la destrucción del gobierno y del sistema político que lo hizo posible. Las acciones de masas y el terrorismo opositor tampoco tienen la fuerza necesaria para producir por sí mismos la caída del gobierno, pero crean el ambiente caótico en que el sentido común de la clase media clama por el orden y la autoridad. En estas circunstancias queda el camino abierto para la intervención de las fuerzas armadas

que se erigen en la única institución articuladora de la dominación por medio de su instrumental exclusivo: la violencia y la represión.

La acción militar que derroca al gobierno, asesina al presidente de la República y emprende la tarea de desarticular a las fuerzas políticas que lo apoyan a través de todos los medios de represión (asesinatos, prisión, tortura, expulsión del país), reúne el consenso opositor en dos puntos: 1] eliminación del gobierno, y 2] creación de condiciones que impidan la repetición de un triunfo de la izquierda. La solución buscada por la dictadura para garantizar la concreción del segundo punto es la que contribuye más a definir el carácter político del régimen a partir de 1973.

La composición social, la integración al sistema político y la ideología de la democracia cristiana permiten suponer que ésta, y en particular su dirección liderada por Frei, adherían al proyecto golpista en tanto éste tuviera un carácter restaurador del sistema político, con exclusión de las fuerzas de izquierda como garantía de la no repetición de la situación de 1970. Esta imputación es plausible a la luz del papel subordinado a la estrategia golpista que desempeñó la representación parlamentaria demócrata cristiana en el último período antes del golpe, legitimado de antemano la intervención armada al votar una declaración de inconstitucionalidad de la acción del gobierno en el parlamento, a pesar de que esa declaración no se encuadraba en ninguna de las facultades de ese órgano político, y de la declaración emitida por la directiva de la democracia cristiana, presidida por Patricio Alwyn, al día siguiente del golpe de Estado, en la cual, todavía, se atribuye más importancia a la caída del gobierno de la Unidad Popular que a la destrucción del sistema político en su conjunto. Además, en una visión del golpe como restauración, la democracia cristiana, y Frei personalmente en su calidad de presidente del senado, aparecían bien ubicados para suceder al gobierno y al presidente desaparecidos.

En síntesis, el diseño estratégico que conduce a la dictadura a consolidarse sobre la base de la supresión del sistema político, como sistema de gobierno, y del sistema de partidos como articulación política de la sociedad chilena no es resultado de una acción precipitada ni una impotencia de los partidos liberal y conservador, a partir de 1965, para garantizar los intereses de la clase dominante dentro de ese sistema político. El diseño de dictadura no se precisa, probablemente, más que a medida que la decisión de romper el sistema político va ganando posiciones, proceso que se acelera en forma considerable al subordinarse las fuerzas demócrata cristianas al golpismo como táctica de oposición al gobierno de la Unidad Popular.

Algunas etapas de este proceso, que requieren de investigación histórica, son:

1] Incorporación de los cuadros fascistas de viejo cuño, recuperados de la marginalidad política, al fusionarse conservadores y liberales en el Partido Nacional.

2] Creciente desarrollo de las organizaciones corporativas, representantes de los intereses económicos de la clase dominante, como instrumento

político preferido frente al partido político, hasta el punto de intentar desarrollarlos como organizaciones de masas.

3] Desarrollo de las organizaciones sociales de la clase media como medios de movilización de masas (gremios profesionales, amas de casa, transportistas, etcétera).

4] Acción terrorista de bandas fascistas de nuevo cuño, creadas y mantenidas al margen del sistema de partidos y sin intención aparente de incorporarse a él (Patria y Libertad).

5] Alianza opositora democracia cristiana-derecha, en la que:

a] la derecha (a través del Partido Nacional) aparece haciendo concesiones a la democracia cristiana en la acción opositora que se desarrolla dentro del sistema político, pero va ganando posiciones a medida que se frustran los intentos de trabar la acción del gobierno por estos medios, hasta terminar obteniendo el apoyo de la democracia cristiana para el golpe de Estado;

b] la democracia cristiana pone su capacidad de movilización de masas al servicio de la estrategia golpista ya que, una vez en la calle, la iniciativa queda en manos de los grupos fascistas más violentos en su acción.

6] La subordinación de la democracia cristiana al golpe culmina con la desaparición de su aliado, el Partido Nacional, que acuerda su autodisolución una vez consumado el derrocamiento del gobierno de la izquierda. Éste es el último paso de la derecha en la liquidación del sistema político.

La dictadura y los nuevos actores políticos de oposición

El carácter excluyente de la influencia de cualquier sector social que no sea la clase dominante del proceso político chileno es lo que define a la dictadura. La consolidación del aparato armado como eje de la estructura estatal busca eliminar la posibilidad de que otros intereses se articulen en niveles capaces de producir hechos políticos.

Los intereses de la clase dominante se presentan desnudos y se enfrentan como tales (grupos de poder económico) sin otra mediación política que sus intelectuales en los mandos económicos del gobierno y sin otra ideología que las visiones tecnocráticas que compiten por la oportunidad de orientar el desarrollo del país a través de la política económica de la dictadura. Los pasos normales del análisis político de la acción gubernamental de la dictadura buscan vincular cada hecho político, por ejemplo, cambios en el gabinete ministerial o nuevas medidas que se anuncian, con los intereses de grupos de poder económico. El eje de la discusión política por más de ocho años ha sido la viabilidad o no del modelo económico y las alternativas que se abren en cada paso o cada crisis de su implementación. Las cuestiones políticas adquieren el curioso disfraz de la consideración del "costo social" del modelo económico y las posiciones respecto de éstas no se iden-

tifican con organizaciones sino con personalidades que representan corrientes cuya definición no avanza más allá de calificativos como “duros” y “blandos” frente a cuestiones casi siempre coyunturales.

El camino de la institucionalización de la dictadura ha avanzado a través de la eliminación de las instancias de articulación y representación de los intereses de las clases sociales o de otros grupos. El primer paso fue la eliminación de los partidos y del sistema conformado por ellos, teniendo mucho más éxito la segunda tarea que la primera. Será necesario analizar aparte la existencia de los partidos en ausencia de un sistema de partidos, lo que constituye uno de los problemas centrales que enfrentan las organizaciones de la izquierda chilena. Al mismo tiempo se emprendió la eliminación de las organizaciones sindicales, empezando por las que mostraban influencia de izquierda pero no deteniéndose allí. Incluso los dirigentes y organizaciones sindicales que apoyaron en algún momento a la dictadura, o que sin apoyarla pensaron que era el momento de ocupar con una ideología diferente el espacio que la represión a los sindicalistas de la Unidad Popular creaba, tienen una existencia y representación más bien precarias. Los gremios profesionales han sido despojados de su estatus legal y representatividad por la constitución aprobada por Pinochet en 1980.

En el orden administrativo también se avanza en la línea de la atomización. En educación, la reorganización universitaria tiene el efecto de concentrar prácticamente toda la actividad de esas instituciones en la formación de profesionales. El hecho de entregar a las municipalidades el control y administración de servicios sociales como educación, salud, etcétera, que estaban tradicionalmente organizados en el nivel nacional, despolitizan en gran medida los planteamientos y la acción de quienes se vinculan a ellos como trabajadores o usuarios, en ausencia de otras organizaciones —por ejemplo los partidos— que pudieran articularlos en niveles más globales.

En este camino la dictadura ha dejado a muchos que la apoyaron. Comenzó con la democracia cristiana, a la que no sólo no le dio el papel aparentemente prometido sino que le quitó el escenario bajo sus pies. Gremios patronales y colegios profesionales no encuentran audiencia con el gobierno. Las personalidades que han mostrado preocupación por el “costo social” de la experiencia han sido dejadas de lado no importando cuán alto fuera su rango (general Leigh), y los fascistas doctrinarios no han tenido su oportunidad de crear un movimiento de masas ni para apoyar al gobierno.

Nada de esto significa que la política haya desaparecido como actividad en el país. Sin embargo, es necesario definir las formas y características con que esta actividad se desarrolla bajo las condiciones de la dictadura. Sin contar con la información cotidiana, nuestra visión es necesariamente abstracta, no obstante lo cual intentaremos una aproximación a los hechos políticos y sus características.

De acuerdo con los rasgos que hemos señalado del régimen político dictatorial, se observa un desplazamiento de la acción política hacia ámbi-

tos que antes, sin ser apolíticos o despolitizados, no tenían acción protagónica. El más importante de éstos es el ámbito militar. Las fuerzas armadas no incursionaron en el escenario político en calidad de instrumento. Lo invadieron, lo destruyeron y pretenden refundarlo a partir de su propia estructura. La política se militariza, pero esto no se puede hacer sin el costo de la politización de lo militar y, además, de una creciente participación militar en la vida de la sociedad en su conjunto. Una parte importante de la vida política se traslada al interior de las instituciones armadas. Las tareas represivas implican definiciones políticas de los participantes en ellas. La intervención militar en la administración a todos los niveles acarrea hacia dentro de la institución los problemas del gobierno en general. Primero bajo la forma de una búsqueda de una línea inspiradora de la acción de los cuadros militares en los sectores no militares de la administración y, poco a poco, la definición de estas líneas tiene que dar lugar a confrontaciones de posiciones alternativas aisladas que pueden desarrollarse como proposiciones más o menos articuladas en distintos niveles de generalidad, los que, si maduran, pueden llegar a expresarse orgánicamente en facciones. Así, si las fuerzas armadas están para quedarse en la política, la política está para quedarse en ellas y proponerles, desde los particulares ángulos de visión que las caracterizan, todos los problemas propios de un partido político en el gobierno.

Un segundo actor político que saltó al primer plano sin saber cuál era el nuevo escenario, es la Iglesia Católica. Hasta el golpe sus vinculaciones con los actores políticos principales, tales como los partidos y el gobierno, conservaban una distancia que se definía por distintos planos de ubicación de su acción política. El golpe le planteó a la iglesia tareas nuevas. Primero, la convirtió en la única estructura nacional capaz, si no de oponerse, al menos de registrar y tratar de paliar los efectos de la represión masiva. Luego se le planteó el problema de redefinir sus canales de influencia ideológica hacia el gobierno, hacia otros órganos políticos y hacia la sociedad en general. A través de sus actividades en el campo de la defensa de los derechos humanos, la iglesia entró en una relación nunca antes vista con las organizaciones de la izquierda. Por otra parte, en el nivel social y de base, la iglesia se convirtió en una institución que proporcionó una de las pocas posibilidades, si no de organización, de simple agrupamiento y expresión colectiva de individuos víctimas de una política dirigida a su atomización social. Actos litúrgicos, que no se ajustan al ritual de la misa, son la oportunidad de reunión y expresión en los locales de la iglesia para individuos que, en otras circunstancias, podrían no vincularse de manera alguna a la práctica religiosa. Este nuevo papel de la iglesia como institución social refuerza la militancia de sus miembros, lo cual parece expresarse, entre otras cosas, en números inusuales para el mundo actual y para la iglesia chilena en otros períodos, de ordenaciones sacerdotales. Otro nivel, más significativo en el plano político coyuntural, en el cual el papel de la iglesia ha experimentado cambios, es el de su relación con la educación, la cultura y los intelectuales.

La Universidad Católica de Chile, máxima expresión de esta relación, fue, al igual que todas las universidades del país, intervenida por la dictadura y sometida más tarde a sus reformas. A la vez, un gran número de intelectuales vinculados a la democracia cristiana y a las organizaciones de la izquierda, tanto de origen cristiano como no cristiano, quedaron no sólo sin empleo sino también sin un ámbito institucional y material en el cual desarrollar sus actividades. La iglesia ha sido determinante en la creación de la Academia de Humanismo Cristiano, organismo muy importante, aunque no único, que cumple la función de marco para la producción, confrontación y difusión del pensamiento de los intelectuales disidentes "tolerados", principalmente cientistas sociales.

La actividad de intelectuales disidentes es importante también en sus expresiones no ligadas a la iglesia. Privados de las conexiones orgánicas con la sociedad y la política (expulsados de las universidades, en su gran mayoría, y sin el funcionamiento normal de los partidos políticos como instancia de articulación entre el trabajo de los intelectuales y la actividad política, tanto de cuadros como de masas), se han refugiado en institutos privados que buscan mantener una línea de investigación de problemas económicos, sociales y políticos, independiente de la dictadura y emprender, hasta donde sea posible, la crítica de ésta. Además de la ya mencionada Academia de Humanismo Cristiano, existen FLACSO, CIEPLAN, VECTOR, SUY, CENECA, ILET, Instituto Chileno de Estudios Humanísticos, PIE y Corporación de Promoción Universitaria, CPU. Buena parte de los intelectuales involucrados en estos institutos ha incursionado en el periodismo como una forma más o menos inorgánica de difundir su producción en el conjunto de la sociedad.

El periodismo político, con las limitaciones propias de la situación impuesta por la dictadura, se ha transformado en el canal privilegiado de expresión de intelectuales no tradicionalmente ligados a la actividad política en forma profesional y de antiguos ideólogos vinculados a organizaciones existentes antes del golpe de Estado. Por supuesto, no todas las organizaciones de izquierda logran una presencia por esta vía en la vida nacional. Es notorio que también algunos representantes del fascismo más doctrinario hayan recurrido al columnismo político en los periódicos.

Por otra parte, el desarrollo del periodismo político por parte de intelectuales no vinculados antes a este tipo de expresión es una muestra más de un proceso general de politización de la vida cultural. La política, inorgánica como es al faltar el eslabón fundamental de su estructura anterior, el partido, distribuye su contenido de manera difusa a través de todas las formas de la actividad intelectual. Así, la música, el teatro, las publicaciones de carácter cultural en general, etcétera, pueden convertirse, y de hecho así ocurre, en eventos políticos. La búsqueda de canales que conecten la política y la sociedad, que contrarresten la tendencia atomizadora del proyecto dictatorial, tiene una riqueza de expresiones insospechadas en otros tiempos.

El sector más importante como instancia de articulación de los intereses de la población y de enfrentamiento de éstos con las políticas de la dictadu-

ra es el movimiento sindical. Su situación no es envidiable dada la represión constante a sus dirigentes pero no ha podido eliminarlo la dictadura. Está en la primera línea de choque con la política económica y, por ser este el campo fundamental del enfrentamiento de alternativas políticas, es el principal interlocutor del gobierno. Esto no quiere decir que sea un interlocutor cuya legitimidad esté reconocida.

En el momento del golpe de Estado, el movimiento sindical estaba bajo la hegemonía de la Central Única de Trabajadores (CUT), que respondía ideológicamente a la alianza comunista-socialista pero en la que participaban también sectores radicales y demócrata cristianos. Estos últimos representaban el competidor más serio de los partidos marxistas en el campo sindical. La represión a la izquierda a partir de septiembre de 1973 golpeó con particular dureza a los dirigentes sindicales. Esto parecía ofrecer una oportunidad para remplazar la influencia de socialistas y comunistas en el movimiento sindical por la de los demócrata cristianos, los postulantes más serios, o aun para crear un movimiento sindical que obedeciera a los lineamientos de la dictadura. Ambas cosas suponían que la dictadura tomara un rumbo que, en los hechos, no tomó. Por una parte, el crear un movimiento sindical bajo la dirección de los cuadros demócrata cristianos (con influencia y apoyo variable por parte de la iglesia) suponía el proyecto global tras el cual la democracia cristiana apoyó el golpe de Estado. Esto es, una restauración a corto plazo del sistema político con exclusión de las fuerzas de la izquierda. Por otra parte, la formación de un movimiento sindical dócil a la dirección de la dictadura suponía la búsqueda por parte de ésta de alguna base de apoyo de masas, lo que podría implicar el remplazo de la élite política anterior por una nueva clase política civil formada a partir de los fascistas doctrinarios que la apoyan. Nada de esto ha ocurrido. La dictadura ha sido invariable en su línea de exclusión de la sociedad de la actividad política y en su intento de desarticular o al menos atomizar las instancias de expresión de los sectores sociales desde los cuales pudiera provenir el más mínimo cuestionamiento a su acción.

Todo esto no implica que la dictadura renuncie a la pretensión de construir una base de apoyo a su acción en la sociedad chilena. Tampoco significa que no existan dirigentes y cuadros sindicales que apoyen al gobierno. Lo que ocurre es que en la acción gubernamental la prioridad absoluta pertenece a la puesta en marcha de un modelo económico de desarrollo al cual se debe subordinar cualquier acción en el terreno político y social. Así, por ejemplo, la idea acariciada por los sectores más doctrinariamente identificados con el fascismo de constituir un movimiento cívico-militar que organice el apoyo a la dictadura ha sido lanzada por Pinochet y más tarde por algunos de sus seguidores. Sin embargo, este movimiento no tendría otra estructura que la atomizada organización de la **dominación política** que la dictadura hace residir en las municipalidades. Por otra parte, este movimiento no puede ofrecer otra cosa que la participación en una ideología, y sólo en el nivel municipal ya que las cues-

tiones de política económica, constituidas en las cuestiones políticas centrales, siguen siendo decididas por el gobierno central. Peor aún es la situación de los dirigentes sindicales adictos a la dictadura, a quienes la política económica y su correlato, la política laboral, los empuja no sólo a distanciarse del gobierno sino también a tener que unirse a sectores sindicales de otras orientaciones ideológicas para la defensa de derechos mínimos de sus representados. La única alternativa para ellos es defender lo indefendible y perder su posición de dirigentes.

Los dirigentes y cuadros sindicales de la democracia cristiana y de otras tendencias que buscaban aprovechar la eliminación de la competencia representada por la izquierda en este campo, han ganado posiciones gracias a una multiplicidad de factores, como la mencionada influencia que ha ganado la iglesia en varios ámbitos y la represión, que por un tiempo eliminó a los cuadros sindicales de mayor trayectoria vinculados a los partidos de la Unidad Popular. Sin embargo, el intento de constituir un movimiento sindical libre de la influencia de los partidos marxistas, que contó con variados apoyos nacionales e internacionales, no parece haber fructificado hasta ahora debido a algunos factores que contribuyen a definir al carácter del movimiento sindical chileno como uno de los principales actores políticos bajo las condiciones de la dictadura.

En primer lugar, es el carácter defensivo, su retroceso permanente a partir de 1973, lo que hace que el movimiento sindical no pueda definir posturas políticas en el terreno ideológico que apunten mucho más allá de la oposición a las medidas que afectan a los trabajadores adoptadas por la dictadura. Así como la acción gubernamental empuja a la oposición en el terreno sindical, aun a quienes ideológicamente coinciden con la dictadura, la ausencia de un juego político con actores reconocidos que excluya a la izquierda, sea una restauración o una refundación, hace que quienes quisieran alcanzar la hegemonía en el movimiento sindical, sobre la base de esa exclusión, no encuentren la legitimidad imprescindible para convertir en efectiva la ventaja de representatividad que buscan.

En segundo lugar, la destrucción del sistema político ha dado mayor peso como actor político al movimiento sindical. Si antes del golpe los partidos estaban presentes en él y competían por la influencia y la hegemonía, ahora viven ideológicamente a través de él. La importancia de los cuadros sindicales para cada partido de la izquierda ha crecido en la medida en que son la única expresión de un contacto orgánico con las clases a las que aspiran representar.

La competencia entre distintas agrupaciones sindicales como la Coordinadora Nacional Sindical (CNS), el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y la Unión Democrática de Trabajadores (UDT), ex Grupo de los Diez, más alguna otra como la Confederación de Empleados Particulares (CEPCH), expresa una lucha ideológica en la que se enfrentan proyectos de distinto signo político para la reconstrucción del movimiento sindical. La cuestión de la unidad, sobre cuya necesidad parece haber consenso en el terreno de la práctica defensiva a la que se ha visto reducido el sindicalis-

mo chileno en su conjunto, topa contra la cuestión de la exclusión de los cuadros sindicales asociados con los partidos marxistas. Así, por ejemplo, la disidencia del llamado Grupo de los Diez que en 1978 constituyó la CNS se opuso al carácter excluyente que los diez daban a su autodefinición de "democráticos". Más tarde, en 1979, las cúpulas mencionadas confluyeron en el Comando de Defensa de los Derechos Sindicales, el cual se quebró ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo sobre el carácter de la celebración unitaria del 1o. de mayo de 1980. Cuando, un año más tarde, lograron celebrar en conjunto el día del trabajo, tuvo lugar en Santiago otra celebración de la misma efeméride organizada por la agrupación de sindicatos Solidaridad y por una federación de sindicatos a nivel local, representante de un fenómeno nuevo y más o menos difundido. El 1o. de mayo de 1982 la celebración fue organizada en actos separados por el FUT, la UDT y la CNS.

Por detrás de estos desacuerdos aparece el tercer factor que define el carácter de este movimiento: la supervivencia de la ideología de los partidos que tenían la hegemonía antes de 1973. Esta influencia ideológica, expresada en la presencia de cuadros comunistas y socialistas en las direcciones sindicales a pesar de la represión, tiene una significación fundamental para los partidos de la izquierda. Si bien esta influencia ideológica es parte importante de la explicación del fracaso de los proyectos de reconstrucción del movimiento sindical sobre bases de exclusión de la izquierda y marca también un límite fundamental a la victoria militar y política de los golpistas de 1973, no hay que olvidar que encuentra limitaciones gravísimas para expresarse en la búsqueda de una unidad cuya necesidad nadie discute pero enmarcada por un retroceso defensivo sobre posiciones que habían sido ganadas en muchos años.

III. Dos posiciones en la izquierda chilena

La división de la izquierda chilena en dos bloques, hecha pública en mayo de 1982, representa un primer paso en la consolidación de una situación que se expresó a lo largo de ocho años en la existencia de corrientes inter e intrapartidarias y que aparece hoy con la claridad suficiente como para intentar un primer acercamiento a su análisis. Los hechos que ratifican esta conformación de bloques son los siguientes: una declaración del Secretariado de la Convergencia Socialista, fechada el 1 de mayo en Santiago de Chile, titulada "Nuestra propuesta: unidad y solidaridad frente a la crisis nacional", firmada por el Partido Socialista de Chile, MAPU, MAPU Obrero y Campesino y la Izquierda Cristiana, y otra declaración, fechada el 21 de mayo en México, titulada "Llamamiento a la unidad y al combate", firmada por el Partido Socialista de Chile, el Partido Comunista, el Partido Radical y MIR.

El Partido Socialista de Chile que firma la declaración de México es el encabezado por Clodomiro Almeyda, en tanto el que aparece incluido

en la convergencia es una parte del sector que encabezó Carlos Altamirano en abril de 1979, cuando se produjo la división más importante en el socialismo chileno. Estos dos no son los únicos sectores que usan el mismo nombre, por lo cual habrá que aclarar, en algunas ocasiones que se mencione a los socialistas, a quién se está haciendo referencia.

Hay que ser cuidadoso en el establecimiento de los puntos de ruptura entre los dos bloques, usando los términos de sus propias declaraciones, para separarlos de la significación que pretendemos imputarles en nuestro análisis. Por eso, reproduciremos las afirmaciones centrales de cada documento.

Los planteamientos de base

La declaración de la convergencia comienza afirmando que quienes la suscriben forman parte de “un amplio proceso que apunta a construir una nueva fuerza política en Chile”, cuyo objetivo es la “renovación y reformulación del socialismo chileno”.

Es importante en este documento la diferencia y distancia que se establece entre la unidad de las organizaciones políticas y la unidad de los trabajadores como fuerza social. Así se dice que la propuesta contenida en esta declaración se entrega como homenaje “a los trabajadores chilenos, cuyos esfuerzos unitarios nos comprometen aún más para asumir en plenitud las responsabilidades que nos corresponden en la difícil hora presente”. Más adelante se señala que: “El llamado a la unidad y la respuesta generosa que están dando en estos momentos numerosas organizaciones sindicales, muestran un camino en el que es necesario persistir, eliminando cualquier obstáculo que impida su rápida materialización.”

La única dimensión política y social posible para enfrentar y resolver la crisis nacional, se señala, es la democracia. Como opuestos a la democracia se enumeran “el dogmatismo, la intolerancia, los clasismos estrechos, la prepotencia y el totalitarismo”. Lo que hay que construir es “una alternativa de mayoría”, “más allá de los credos, ideologías o legítimos intereses particulares”.

Ante el fracaso del experimento en el que se comprometieron las fuerzas armadas, se atribuye a éstas la responsabilidad y el deber de no obstaculizar una salida “antes que sea demasiado tarde”. Si se profundiza la crisis, si se reprimen los movimientos sociales, si se acallan las voces que proponen alternativas, el costo de la libertad puede ser “inmensamente más alto y doloroso”.

La conquista de la libertad es una tarea en la que los partidos democráticos pueden hacer un “aporte insustituible”, “a condición de que abandonen los viejos y gastados caminos. La hora presente exige de nosotros un proceso integral de renovación que nos aproxime a la realidad del país y nos transforme en participantes activos, que ayude a la reconstrucción de

los movimientos sociales plurales, autónomos y democráticos; proceso capaz de reconstruir al país y transformarlo en una nación vigorosa y organizada, en condiciones de conquistar la libertad, construirla y defenderla”.

Se proponen algunas medidas económicas destinadas a conformar un programa mínimo de emergencia que reúna el consenso de quienes se oponen a la dictadura y se agrega la demanda de disolución de los aparatos policiales de ésta. Se pide un estatuto de derechos ciudadanos que garantice libertades básicas y un sistema judicial “capaz de hacer valer los derechos de cada uno”. “En especial se requiere garantizar el papel de los sindicatos y su libertad de negociación y constitución.”

“Ninguna de estas medidas pueden ser tomadas por un gobierno que depende del arbitrio de la fuerza para su existencia, ellas deben ser el origen de un amplio consenso de quienes honradamente aspiran a construir una real y plena democracia para nuestro país.” “. . .cualquier salida a la crisis supone la plena vigencia de los derechos humanos y el reencauzamiento de nuestra historia por la senda democrática.”

Los requisitos para la superación de la crisis son: unidad, movilización social y renovación de las alternativas. La convergencia busca “interpretar los sentimientos de miles de compatriotas que tienen en el socialismo libertario una aspiración sentida [. . .] y que por razones legítimas no se sienten interpretados por ninguna de nuestras organizaciones por separado. La Convergencia Socialista apunta así, no sólo a convertirse en una estrecha alianza entre nuestros partidos, sino que a la constitución de una nueva fuerza política, capaz de ofrecer al país una alternativa democrática, nacional, popular y socialista”.

El documento termina con “un llamado a todos los chilenos, cualquiera que sean sus creencias u opciones políticas a integrarse a este gran esfuerzo de salvación nacional. Esfuerzo que, ciertamente, tendrá en los movimiento de nuestra historia por la senda democrática”.

Al igual que la declaración de la Convergencia, el “llamamiento a la unidad y al combate” parte de la situación de crisis “económica”, social y moral que vive el régimen imperante en Chile, para agregar que “esta situación puede transformarse en una crisis política de carácter nacional, si se desarrolla hasta llevar a la más grande movilización de masas que haya conocido el país, en demanda de reivindicaciones específicas, en contra del modelo y la política económica, por el derrocamiento de la tiranía y la conquista de una nueva democracia. Surge la posibilidad de dar una solución popular y democrática a los problemas del país”.

“La garantía de que una movilización de masas, una lucha generalizada de todo el pueblo, conduzca a cambios reales y a una salida auténticamente democrática y popular, radica en la conducción única, unitaria y justa del movimiento democrático antidictatorial; de la izquierda chilena, en primer lugar, y del conjunto de las fuerzas de oposición, unidos tras una política ofensiva de lucha por el derrocamiento de la dictadura.” “El grado de unidad actual de la izquierda chilena es insuficiente para desple-

gar un amplio enfrentamiento de masas contra la tiranía y que convoque a todos los que están en su contra. Todavía persisten ilusiones aperturistas.”

“La vida ha mostrado que el camino es uno solo: lucha de masas, unidad de la izquierda y de todos los demócratas y desarrollo de las más diversas formas de combate que expresen la rebeldía popular.” “Urge actuar unidos, emprender la lucha ofensiva y rupturista contra la dictadura [...] Si no hubiera pleno acuerdo, ello no será obstáculo para avanzar en el camino de la rebelión popular y el combate más decidido contra la tiranía. Más temprano o más tarde, se sumarán todos los sectores democráticos y revolucionarios.”

“Es indispensable asimismo levantar un programa común para esta etapa: partir de una plataforma mínima hasta entregar al pueblo un proyecto alternativo unitario. [...] Nuestro objetivo final es el socialismo. La lucha por él pasa hoy por el derrocamiento de la dictadura y el establecimiento de una democracia renovada y popular.”

“Nuestros partidos no rehúyen la discusión ideológica, pero no estamos por anteponer la discusión al combate; ello conduce al inmovilismo. Estamos por debatir en medio de la lucha y [...] hacerla más efectiva.” “Estamos convencidos de que en Chile, ninguna solución real y popular a la crisis presente, puede constituirse al margen de la izquierda, al margen del movimiento popular antidictatorial.”

“Resulta necesario fortalecer y extender las organizaciones de masas en los distintos movimientos sociales, desarrollar su coordinación tanto en los frentes como a nivel local, regional y nacional. No menos importante es articular la organización legal y semilegal con la organización clandestina, llamada a dar continuidad a las luchas populares frente a las ofensivas de la represión. Gran importancia reviste la unificación y centralización del movimiento sindical, poblador, estudiantil, campesino, mapuche, de mujeres y de derechos humanos. En respuesta a las agresiones del régimen es preciso crear y extender las organizaciones de autodefensa en el seno del movimiento de masas. Para impulsar el combate social contra la dictadura, adquiere gran trascendencia la movilización del pueblo en las localidades contra el actual poder municipal.”

“Corresponde hoy poner en tensión las fuerzas del pueblo y nuestros partidos, para extender la lucha ofensiva y rupturista de las masas, para crear un clima de desobediencia civil, de descontento ciudadano generalizado, de insubordinación popular contra el régimen y sus instituciones, para quebrar el orden público y desestabilizar el gobierno, abriendo paso a formas superiores y decisivas de lucha contra la tiranía.”

“Llamamos a fortalecer la unidad de la izquierda en la lucha para que se convierta en el destacamento de dirección y fuerza más avanzada en los combates por el derrocamiento de la dictadura, que marcha estrechamente unida con las masas y el pueblo, despliegue la acción común con todas las fuerzas opositoras y transforme el camino de la rebelión popular en un camino irreversible y victorioso.”

Las citas son largas, pero es necesario establecer los desacuerdos explícitos con el fin de no cometer errores en la atribución de posiciones a los firmantes de cada documento. Se intentará ahora explicitar sintéticamente lo que nos parecen los puntos centrales en esta controversia.

Tres parecen ser los desacuerdos centrales entre los dos sectores de la izquierda chilena: 1] la relación partido-movimiento social en la lucha contra la dictadura; 2] el carácter estratégico del proyecto opositor, en especial la relación democracia-socialismo, y 3] las cuestiones tácticas de la lucha antidictatorial, en particular la política militar de la oposición.

La relación partido-movimiento social se plantea como problema por los componentes de la Convergencia a partir de la situación prevaleciente hoy en Chile. Tal como se describió antes, la situación impuesta por la dictadura, al desarticular el sistema de representación que tenía su eje en los partidos, ha devuelto gran autonomía a algunos actores sociales, en particular al movimiento sindical y a los intelectuales. En estas condiciones, la convergencia expresa esa autonomía en términos de un rechazo a la concepción vanguardista que se postula en el "Llamamiento", para la cual el partido político tiene la función de coordinar y dar contenido global a las demandas de los distintos movimientos sociales, permitiendo así pasar a formas superiores de lucha.

Esta diferencia se proyecta en el carácter estratégico del proyecto opositor. Para la Convergencia, la autonomía de los movimientos sociales respecto de los partidos no es una cuestión accidental ni coyuntural. Es un hecho estructural que, eventualmente, en otras condiciones, contribuiría a garantizar los derechos democráticos, en tanto la subordinación a los partidos podría resultar en restricciones a la democracia, en particular en el caso de una transición al socialismo, dentro de la cual esta subordinación favorecería la implantación de formas autoritarias de gobierno. El "Llamamiento" no toca esta cuestión. Menciona la lucha democrática como una etapa (la presente) en la lucha por el socialismo, pero queda implícito el supuesto de que hay consenso acerca de la significación de "socialismo". La Convergencia plantea, así, una cuestión que no es retomada por el grupo que firma el "Llamamiento".

La tercera cuestión, que no es independiente de las anteriores, se plantea en términos de opciones tácticas para enfrentar a la dictadura. Para la Convergencia lo fundamental es la unidad que trabajosamente se abre paso en los movimientos sociales. El papel de los partidos no puede ser el imponer una línea a esos movimientos sino contribuir a la formación de una plataforma en la que se expresen tanto los partidos como los movimientos sociales. Para los cuatro del "Llamamiento", todas las formas de lucha deben confluír hacia el cuestionamiento global de la dictadura, dando especial importancia al contenido rupturista de las acciones, lo cual implica algunas definiciones en el terreno de la política militar.

Antes de analizar el contenido de estas diferencias, una última parte necesaria en esta reseña de los documentos es destacar las acusaciones mutuas cruzadas entre los dos sectores. Por una parte, la Convergencia

caracteriza negativamente a los otros partidos cuando pone como condición de su participación y aportación a un proceso de lucha democrática, el cambio de algunos de sus métodos y concepciones. Por otra, el "Llamamiento" acepta la discusión "en medio de la lucha", acusando implícitamente a la Convergencia de plantear una discusión paralizante ya sea por su contenido o por los términos en que se la propone.

Hay tres aspectos que examinar de esta ruptura en la izquierda chilena: 1] su significado político; 2] su contenido ideológico, y 3] su contenido teórico.

El significado político

En términos de las fuerzas políticas chilenas, presenta varios aspectos complejos. Por un lado, la caracterización de las fuerzas de ambos grupos parece clara, con sólo una excepción en cada bloque —el MIR y el Partido Socialista de la Convergencia— a los que nos referiremos luego. Por un lado se agrupan los partidos más tradicionales de la izquierda (Partido Socialista, Partido Comunista y Partido Radical), es decir los más integrados al sistema político vigente hasta 1973, y, por el otro, los grupos llegados a ese sistema como organizaciones independientes en el último período de su vigencia y, a la vez, todos originados en la democracia cristiana. Los dos MAPU, desprendidos de la democracia cristiana en 1969 y la izquierda cristiana en 1971.

En cuanto a la composición de sus cuadros, el bloque PC-PR-PS-MIR reúne a los políticos más integrados a la élite profesional del sistema político chileno, es decir, mayor número de cuadros con trayectoria política profesional en cargos de elección popular antes de 1973 (con la excepción del MIR). La Convergencia reúne, en general, cuadros más jóvenes, por lo tanto, de menor trayectoria dentro del antiguo sistema político y, además, distintivamente marcados por su formación universitaria, que les permitió una integración al aparato del Estado en puestos de designación más que de elección (o bien como académicos vinculados en calidad de "ideólogos" a los partidos, pero subordinados a las direcciones conformadas por los políticos más profesionales).

Una objeción posible a esta caracterización de la Convergencia es que los rasgos señalados se refuerzan unos con otros. En última instancia, hay una diferencia generacional que explicaría todas las demás diferencias. Sin embargo, dado que no es posible contrastar empíricamente estas afirmaciones, hay dos elementos que considerar: la caracterización se refiere a la tendencia a agruparse de individuos que comparten una o más de las características señaladas, no pudiéndose por lo tanto, deducir a partir de esta caracterización del bloque político las características de ningún individuo que forme parte de él, aun cuando se haya aludido a características individuales y aun cuando a cualquiera que conozca un poco la política chilena anterior a 1973 se le vengan a la mente "ejemplos" individuales.

El segundo elemento a considerar como prueba en favor de esta caracterización es la composición de la fracción socialista que participa en la Convergencia. Originada en la escisión del Partido Socialista, en abril de 1979, esta fracción se ha decantado a través de divisiones internas hasta conformar un grupo que, en general, coincide generacionalmente, y en términos de su integración con el sistema político anterior a 1973, con los tres grupos de origen cristiano con los cuales ha formado el bloque.

Si se recuerda las posiciones que para el período anterior a 1973 hemos asociado con estos sectores políticos en la primera parte de este ensayo, se constata que hay algunas coincidencias y algunas discrepancias. Por ejemplo, si entonces ubicábamos a los sectores más jóvenes y menos integrados al sistema político como más proclives a las posiciones rupturistas, no se ve claro por qué el MIR aparece hoy en el bloque más "tradicionalista", en tanto Carlos Altamirano sí aparecería cerca de la Convergencia. Para explicar esto hay que recurrir a la caracterización de la situación imperante bajo la dictadura, contenida en la segunda parte de este ensayo, y a los cambios que ésta ha provocado en la izquierda chilena. De paso, esto nos obligará a intentar una explicación de por qué la ruptura se produce recién a casi nueve años de la derrota de la Unidad Popular.

El reagrupamiento se produce luego de un largo proceso de crisis de todas y cada una de las organizaciones de la Unidad Popular, cuyo punto culminante fue la división del Partido Socialista en 1979. Hasta entonces la unidad se había mantenido, precariamente, a través de una discusión más o menos subterránea de las causas de la derrota y la atribución de responsabilidades por ella. Discusión frustrada por las urgencias de la retirada, representadas en las tareas de reagrupar y reorganizar a una izquierda en el exilio y en el interior, organizar y coordinar la solidaridad internacional con el pueblo chileno y las condenas a la dictadura, enfrentar la represión en Chile, etcétera. Legítimamente o no, todo contribuía a que la discusión de la experiencia chilena entre 1970 y 1973 fuera deformada y finalmente frustrada. Los partidos la vivieron como crisis permanente que produjo desprendimientos menores o fraccionamientos internos en casi todos ellos. Por otra parte, la necesidad de una solidaridad internacional amplia hacía necesario no cuestionar la interpretación de la experiencia chilena que impulsaba a gobiernos y fuerzas políticas de distinto signo a solidarizarse con ella en su derrota, conservándose así la ambigüedad que contenía el programa de gobierno de la Unidad Popular y dándose campo a todo tipo de malentendidos.

Esta situación, prolongada por varios años, se tradujo en una virtual ausencia de estrategia y táctica en la izquierda. Se trataba de mantener, en lo posible, y reconstruir, en el exilio y en Chile, la organización de los partidos y, para esto, se reducía la discusión interna a un mínimo, en particular la referente al período 1970-1973. Las declaraciones y proposiciones de política se reducían, en la práctica, a distintas variantes posibles de reconstrucción del sistema de partidos sobre la base de un frente

antidictatorial que incluyera tanto a los partidos de la Unidad Popular como a la democracia cristiana. La oposición a esta línea estaba representada dentro de cada partido por grupos más o menos desarticulados que planteaban problemas como la responsabilidad de los dirigentes de la Unidad Popular en la derrota de 1973 o la necesidad de considerar la lucha armada como vía de enfrentamiento con la dictadura.

Lo determinante para el fracaso de la línea "reconstruccionista" fue la actitud de la democracia cristiana. Liderada, sin cuestionamiento significativo, por Eduardo Frei, hasta la muerte de éste, comprometida con el golpe en los términos que hemos descrito y profundamente anticomunista, nunca aceptó ningún compromiso serio con un frente de oposición a la dictadura. Su línea era la de hegemonizar esa oposición a partir de la exclusión de la izquierda, en particular del Partido Comunista, el cual, a su vez, era el más empeñoso y coherente defensor de esta estrategia de reconstrucción del sistema dentro de la izquierda. Oficiosamente, la democracia cristiana hacía explícitas sus exigencias para un acuerdo con las fuerzas de izquierda. En general, éstas parecerían apuntar a la reconstrucción de la izquierda con características semejantes a las de la socialdemocracia europea (lo cual podría terminar en un bipartidismo a la venezolana, por ejemplo). Los llamados al Partido Comunista chileno a adherir al eurocomunismo, etcétera, se sumaban a los intentos de constitución de bloques que lo excluyeran.

La posición de la democracia cristiana fue determinante en la manutención de la Unidad Popular como alianza de partidos que garantizara la no exclusión de ninguna fuerza en función de una nueva alianza que incluyera a la democracia cristiana. Sin embargo, sin programa ni estrategia más allá del difuso proyecto de reconstrucción del sistema, la existencia de la Unidad Popular se hacía cada vez más fantasmagórica. Los proyectos que contemplaban la exclusión de algunas fuerzas iban encontrando algún eco en reuniones y seminarios en los que se planteaban algunos problemas de la experiencia chilena, bajo el gobierno de la Unidad Popular y bajo la dictadura, para los cuales aquélla en general no tenía respuesta. En esta línea se va produciendo un reagrupamiento de fuerzas semejante al que constituye hoy la Convergencia, pero que no corresponde exactamente al proyecto de la democracia cristiana sino que incorpora algunos elementos que lo vuelven ambiguo, al menos en lo que respecta a las exclusiones.

Frente a esta situación, el único elemento alternativo para la izquierda estaba representado por el MIR. Firme en su concepción de la lucha armada como vía para la toma del poder, y habiendo llevado su castrismo a reconsiderar sus posiciones para hacerlas coincidir con las relaciones entre Cuba y la Unión Soviética, lo único que lo separaba ya del Partido Comunista era su política militar. Esta posición encontraba también representantes en pequeños grupos dentro de los partidos de la Unidad Popular, en particular en el Partido Socialista.

Un último intento de reconstrucción de la Unidad Popular contemplaba la fusión de los partidos "chicos", es decir los de origen cristiano, fundamentalmente, para recomponer la hegemonía comunista-socialista dentro de la alianza. Sin embargo, esto tampoco se produjo.

El proceso de decantación comienza con la división del Partido Socialista en abril de 1979 y culmina con las declaraciones de mayo de 1982, que hemos reseñado. Entre estas dos fechas ocurren algunos hechos decisivos para la conformación de la situación actual. Entre ellos destacaremos el cambio de posición del Partido Comunista respecto de la lucha armada y la incorporación del MIR al bloque de partidos de la izquierda chilena.

El cambio en la posición del Partido Comunista fue anunciado por su secretario general en dos discursos, el 3 de septiembre y el 16 de noviembre de 1980, que tomaron por sorpresa incluso a la propia militancia del partido. La aceptación de la violencia (con los adjetivos del caso, "consiente y responsable") como método de lucha y la proclamación del derecho a rebelión del pueblo, constituyen un golpe de timón en la línea política del Partido Comunista, asociado con el abandono de toda expectativa de descomposición de la dictadura por contradicciones internas, que pudieran generar fisuras en las fuerzas armadas, para abrir así la posibilidad de constitución de juego político en el que eventualmente pudiera participar la izquierda.

La inclusión oficial del MIR en el bloque de partidos de la izquierda chilena se produjo por primera vez públicamente en septiembre de 1981. En un llamamiento "Al Pueblo de Chile", fechado en México, aparecen las firmas de dirigentes de ocho partidos, incluido el MIR, y que se identifican como "todos los partidos de la izquierda chilena" y no como Unidad Popular. El párrafo que refleja la novedad de esta reagrupación de la izquierda es el siguiente: "... el movimiento popular empleará las formas de lucha que estime objetivamente más adecuadas para cada momento. En el desarrollo de la lucha de masas se van articulando en el combate muy diferentes formas de acción, tendientes a desestabilizar la dictadura. Expresiones de desobediencia civil, acciones directas y de propaganda armada también se inscriben en el cuadro de una estrategia rupturista con perspectiva insurreccional".

La que debería haber sido la segunda reunión de los ocho y producido una declaración que avanzara en la línea de unidad proclamada en septiembre de 1981, produjo el "Llamamiento", firmado por sólo cuatro partidos. Entre estas dos reuniones ocurrió la consolidación de la Convergencia y la definición de posiciones comunes tales como las expresadas en su declaración del 10. de mayo.

A primera vista, juzgando por las declaraciones explícitas, en todo este proceso la política militar ha sido decisiva en el reagrupamiento, reordenamiento y posterior división de la izquierda chilena. Por esto es imprescindible tratar de esclarecer su significado más profundo y concreto.

La situación imperante bajo las condiciones impuestas por la dictadura, que ya hemos descrito, y las redefiniciones de las formas de acción y los

actores políticos a que nos hemos referido, plantean el problema de las formas de existencia y acción de los ejes principales del sistema político destruido: los partidos. En el primer momento después del golpe el problema era de reagrupamiento y subsistencia. Desde este punto de vista era ventajosa la posición de los partidos más firmemente enraizados en la clase obrera. Su influencia ideológica en ella garantizaba una representatividad social independiente, hasta cierto punto, de su inserción en el sistema de partidos. De esta manera, aparecían más vulnerables los partidos con un mayor componente de clase media intelectual, para quienes la desaparición del sistema político era prácticamente la desaparición de su campo de acción. Sin embargo, la represión y la prolongación de la situación de dictadura tuvo efectos inesperados para este cálculo.

Los intelectuales, en particular aquellos vinculados a la actividad académica, se vieron forzados a asumir una independencia, no esperada por ellos mismos, respecto a las instituciones en que normalmente insertaban su actividad, sobre todo las universidades. Al mismo tiempo, asumieron una gran independencia respecto a los partidos políticos, al no tener estos últimos canales a través de los cuales subordinar la actividad de los intelectuales en los mismos términos en que esto ocurría en el sistema político existente antes de 1973. Por último, a través del periodismo político se convirtieron en actores políticos por sí mismos.

En cuanto a la influencia ideológica de los partidos de izquierda, en particular el socialista y el comunista, en la clase obrera, no es fácil conservarla a través de una organización clandestina que, en el mejor de los casos, puede desarrollar actividades semilegales en el seno del movimiento sindical. La dictadura no sólo reprimió a las organizaciones y cuadros reconocidamente vinculados con estos partidos, sino que también ha procurado impedir que las elecciones sindicales produzcan dirigentes asociados orgánica o ideológicamente con ellos. En este terreno, el sindical, la lucha política es contra la dictadura, pero la lucha ideológica es contra los demócrata cristianos y otras tendencias que buscan remplazar la influencia marxista (socialista y comunista) y que cuentan con el apoyo de partidos, la iglesia y organizaciones internacionales varias, entre ellas los sindicatos norteamericanos.

En la lucha semilegal, entonces, los partidos de la izquierda, reconstruidos en condiciones de clandestinidad o semiclandestinidad, han visto su acción limitada y cuestionada por competidores internos y externos. El primero es el caso de los intelectuales que, aun militando en los partidos, actúan independientemente de la línea política de éstos, acción que llega a consolidarse en fracciones de los mismos partidos. El cuestionamiento externo proviene de la competencia por la influencia sobre la clase obrera que hemos mencionado, la cual también repercute internamente a través de una autonomía semejante a la de los intelectuales adquirida por los dirigentes sindicales, vinculados a los partidos de izquierda, que han obtenido una presencia legal o semilegal.

Al consolidarse la dictadura a través del proyecto atomizador, con los resultados que hemos descrito, la mejor posibilidad para los partidos políticos que intenten controlar a estos nuevos actores políticos autónomos es el "aparato clandestino". Se desarrolla una lucha entonces entre los actores semilegales y su propio "aparato" dentro de cada partido.

En la medida que un aparato clandestino es medianamente operativo, tiene varias ventajas para convertirse en eje de la existencia de un partido en las condiciones del Chile actual. La primera, y la más importante, es que la acción violenta puede convertirse por sí misma en un hecho político. Dada la ausencia de un sistema político en el que los partidos tengan iniciativa como actores, esta forma les proporciona una vía de recordar su presencia a la sociedad. Una segunda ventaja está constituida por el carácter defensivo de toda la acción semilegal, lo cual da la impresión de mayor importancia a cualquier iniciativa de carácter militar por parte de la oposición, aun cuando sea un hecho aislado y no se garantice la continuidad en esa línea de acción y, además, su impacto en la sociedad sea mínimo. Por último, en la lucha entre sectores semilegales y "aparato" dentro de un partido, este último tiene un instrumento de presión a través de sus acciones, las cuales no afectarán sólo al "aparato" sino que también pueden alcanzar a los sectores semilegales intelectuales o sindical.

Todo esto explicaría las posiciones de los partidos más tradicionales de la izquierda, comunista y socialista, y la incorporación del MIR que no tiene estos problemas ya que el conjunto del partido tiende a coincidir con el "aparato". La posición del Partido Radical se explica por su carácter tradicional, su interés en la defensa del papel del partido como actor político prominente, y sus vinculaciones internacionales con la socialdemocracia, que no tiene objeciones respecto de la lucha armada en contra de las dictaduras.

Los partidos que componen la Convergencia defienden la independencia de los actores políticos semilegales y autónomos y rechazan la sujeción a las direcciones "aparataristas", proponiendo la búsqueda de nuevas relaciones entre partido y movimientos sociales, pero sin poder mostrar una oposición más efectiva a la dictadura que los "aparatos". Es probable que la significación social, en un plazo más largo, de la acción semilegal sea más significativa que la acción militar de los aparatos, que es, por lo demás, incipiente. La última división del sector socialista escindido en 1979 ha dejado en la Convergencia al grupo con mayor influencia de intelectuales y cuadros sindicales y ha aislado a un grupo tradicionalmente "aparatarista".

Ninguno de los dos bloques de la izquierda chilena se distingue por la claridad de su planteamiento estratégico. La Convergencia se plantea en la línea de profundización de los movimientos sociales sin poder decir qué futuro tiene, lo cual requeriría si no un esfuerzo de adivinación por lo menos algunas definiciones ideológicas y teóricas que no son posibles, al menos por el momento, dada la heterogeneidad de sus componentes. Por su parte, los partidos del "Llamamiento" plantean una lucha cuyo desarrollo permanece en la abstracción, en tanto no se precisen y desarrollen las

tácticas militares y políticas que les permitan tener un campo permanente y continuo de iniciativa política que se adecúe a las condiciones concretas imperantes en Chile. En esto es importante recordar que las acciones militares dependerán, para cualquier otro efecto que no sea mantener la presencia más o menos precaria de una organización en el escenario nacional, de acciones en el terreno de los movimientos sociales, en los cuales la acción semilegal es fundamental. Es cierto que el "Llamamiento", e individualmente los partidos que lo firman, cuando se han referido al tema militar, hablan de vincular la lucha armada a la lucha de las masas, pero esto es muy poco más que una expresión de deseos en las condiciones que hemos descrito. En el terreno semilegal, el conjunto de la izquierda sigue actuando a la defensiva y en retroceso y, además, en ese mismo terreno no aparecen mejor ubicados los del "Llamamiento" que los de la Convergencia. Más bien todo parecería indicar que son estos últimos los que tienen mejor apoyo entre los sectores que dentro de los partidos se oponen a los aparatos, mejores relaciones con sectores ideológicos dispuestos a remplazar a la izquierda y mayor "tolerancia" por parte de la dictadura en condiciones que, en general, siguen siendo de represión.

El contenido ideológico de la división

Detrás de las posiciones explícitamente asumidas por los bloques de la izquierda en los documentos que hemos reseñado, queda una cantidad de problemas insinuados. Algunos de ellos no se plantean porque no hay acuerdo entre los componentes de cada bloque, o porque no parecen relevantes a primera vista, en tanto otros quedan claramente omitidos debido a la carencia de respuesta.

Dentro de nuestra visión de los cambios en el personal político, ya sea por la incorporación de nuevas generaciones o por la autonomía que adquieren en las nuevas condiciones algunos sectores antes subordinados a la estructura partidista y a los cuadros que la dirigían, se plantea el problema de definir la ideología con que se justifica y moviliza a estos sectores frente a los partidos y frente a la dictadura.

Frente a la dictadura hay tres cuestiones urgentes, obvias y que, por lo tanto, reúnen el consenso. Éstas son: los derechos humanos, los derechos democráticos y los derechos de los trabajadores. Estas cuestiones son generales pero no abstractas. Se plantean en las condiciones que ya hemos descrito. Se los defiende como derechos suprimidos y trasgredidos de manera sistemática por la dictadura en el marco de un retroceso general de los trabajadores y de la izquierda en particular. Formular, entonces, estas reivindicaciones como programa mínimo, que reúna un bloque democrático hegemónico por una izquierda que se propone la transición al socialismo como estrategia, enfrenta cuestionamientos externos e internos para esa izquierda.

El cuestionamiento externo está dado por los sectores que buscan remplazarla como influencia sobre la clase obrera, y entre los trabajadores en

general, reforzados por el anticomunismo oficial. Estos actores han ganado terreno ideológica y orgánicamente a partir de la exclusión de la izquierda, primero, y, más tarde, sobre la base de su distanciamiento creciente de la dictadura. Sin embargo, buena parte de ellos tienden a justificar todavía su apoyo, o, incluso, su participación en el golpe de Estado de 1973. Esto hace necesario para ellos desconocer la vigencia de los derechos humanos, democráticos y de los trabajadores durante el período de gobierno de la Unidad Popular, declarando, cuando menos, que se encontraban cuestionados por la acción del gobierno o de los "extremistas" que lo apoyaban. Esto tiene el efecto de reforzar la democracia cristiana al poner como modelo de vigencia de estos derechos al período presidencial de Eduardo Frei (1964-1970). Para el sentido común político, este desplazamiento resulta en el establecimiento de una continuidad entre el gobierno de la Unidad Popular y la dictadura, que representan el caos, frente a la "normalidad", que está representada por lo anterior a 1970.

Este cuestionamiento externo se traslada al interior de la izquierda revelando las ambigüedades del proyecto de la Unidad Popular y su resolución posterior a la derrota. Revalorizar el período 1970-1973 requiere una clarificación del sentido del proceso que tuvo lugar en esos años. Si la discusión no ha avanzado más allá de las recriminaciones mutuas entre "reformistas" y "ultras" se debe a la ambigüedad del término "socialismo" que anotamos al comienzo de este ensayo. Tanto la posición reformista, en sus dos versiones posibles (conservar el aparato institucional a toda costa, aun a costo del proyecto socialista, o conservar ese aparato como un paso táctico para "normalizar" el proceso una vez que la correlación de fuerzas fuera más favorable), como la posición "ultra" de "normalizar" el proceso a través del enfrentamiento, tienen en común la aceptación del modelo de socialismo prevaleciente. No hay otra concepción de socialismo vigente en la izquierda chilena y esto la desarma ideológicamente frente a los cuestionamientos externos de los posibles aliados en un bloque democrático.

Este problema no es privativo de la izquierda chilena. No es necesario enumerar los síntomas de la crisis ideológica de la izquierda mundial. Lo que sí es necesario recalcar es que no se sostiene aquí que estos problemas sean "importados" por los intelectuales de la izquierda chilena, antes al contrario, tratamos de mostrar su origen concreto en la situación del país bajo la dictadura. Otra cosa es que los términos en que se formulan los problemas sean los mismos del debate internacional. Esto es inevitable en general y, más aún, cuando esta izquierda tiene una parte de sus militantes en el exilio haciendo una experiencia de vida en países del socialismo real, del capitalismo desarrollado y también en países subdesarrollados.

Los modelos ideológicos alternativos de socialismo no tienen aún la capacidad de permitir a la izquierda chilena rearmarse para la lucha ideológica que libra cotidianamente. Por una parte, la socialdemocracia europea puede ser un apoyo político y material no despreciable, pero su combinación de tecnocracia y extensión de servicios sociales no parece constituir ni un

modelo ni menos un concepto de socialismo que pueda servir a una izquierda como la chilena.

La hegemonía socialista-comunista en la clase obrera y la izquierda chilena antes de 1973 expresaba una independencia ideológica basada en el marxismo-leninismo, que aceptaba casi sin cuestionamiento el modelo de socialismo prevaleciente y que, si buscaba un modelo propio para orientar su acción, lo hacía tratando de incorporar las “particularidades nacionales” y criticando los “errores” en la construcción del socialismo en los países donde este proceso tiene lugar. Hoy se trata de otra cosa. Ya no son errores los que se critican. Se trata de un cuestionamiento estructural del modelo del socialismo en su conjunto.

La Convergencia, o más bien parte de sus integrantes, han planteado la cuestión como una necesidad de su lucha por la democracia en Chile. Han centrado en este cuestionamiento su crítica a los partidos del bloque del “Llamamiento”, cuestionamiento que expresa también la autonomía de los actores políticos que hemos definido. Sin embargo, su planteamiento no carece de ambigüedades. Es una crítica vigente al modelo del “socialismo realmente existente”, pero que no dispone de un modelo alternativo definido ni siquiera en el nivel conceptual. La opción más clara disponible para ellos sería la adhesión a las posiciones de la socialdemocracia europea —la cual resulta atractiva con toda seguridad para algunos de sus miembros— pero no hay consenso entre ellos. Así es como se explica la mención al “socialismo libertario” en el documento de la Convergencia, mención que no podemos asumir como referencia a alguna concepción de corte anarquista porque, a pesar de los antecedentes de este tipo de algún miembro individual de la Convergencia, el anarquismo no parece ser una corriente significativa dentro de ella ni siquiera como recurso profiláctico. Parece más adecuado interpretar esta referencia como un intento de evitar las acusaciones (ya lanzadas, por lo demás) de socialdemócratas.

La situación es, entonces, ambigua. La Convergencia, con su composición heterogénea, busca una concepción de socialismo que la convierta en un instrumento político ideológicamente capaz de hegemonizar la lucha democrática de los sectores más amplios de la oposición a la dictadura. Esta búsqueda avanza en la eliminación de alternativas (parece no ser dominante en ella por el momento la tendencia socialdemócrata, cuestionan el “leninismo” de los partidos del “Llamamiento” y el modelo de socialismo que asocian con esa forma de acción partidaria), pero para la formulación, en términos positivos, de una alternativa de “socialismo” encuentran problemas teóricos muy fuertes. Por lo demás, son mucho más claros en su crítica a los partidos chilenos que en su cuestionamiento del modelo de socialismo prevaleciente, ya que su proposición de búsqueda de alternativas no encara en todas sus consecuencias la crítica de este modelo. Esto es particularmente claro en la timidez de sus pronunciamientos sobre política internacional.

Las definiciones de un socialismo como democrático y de contenido “nacional y popular” producen el consenso necesario para reagrupar algu-

nas fuerzas e intentar la constitución de un instrumento de acción política, pero, a la vez, introducen ambigüedades por donde podría penetrar la concepción socialdemócrata, algún tipo de intento populista, o la misma democracia cristiana, ninguno de los cuales constituye un modelo de socialismo alternativo al realmente existente.

El bloque agrupado tras el "Llamamiento" no responde a los cuestionamientos de la Convergencia más que con su intento de hegemonizar la lucha antidictatorial a través de una mayor efectividad rupturista. No se plantea la lucha ideológica más que como una cuestión de quién será, en definitiva, la vanguardia en la lucha y, por lo tanto, impondrá sus concepciones. Sin embargo, estas concepciones no reúnen consenso. Si se evita la discusión es porque se sabe que no se fortalecerá la unidad a través de ella. A estos cuatro partidos, al igual que al otro bloque, les queda pendiente la tarea de aclarar el sentido del gobierno de la Unidad Popular. Su no cuestionamiento del modelo de socialismo prevaleciente no obedece a un acuerdo al respecto sino más bien a la conservación de la ambigüedad en función de la permanencia de la alianza política. Es en este sentido que relacionamos su aceptación de las formas armadas de lucha con las necesidades de supervivencia de las organizaciones partidarias y no con una estrategia coherente para el derrocamiento de la dictadura y la toma del poder. Como evidencia de lo que se dice aquí se puede aducir, primero, la ausencia de un programa común para el bloque de los cuatro y, segundo, la presencia entre ellos del Partido Radical, el único partido chileno oficialmente afiliado a la Internacional Socialista. Si las inclinaciones hacia la socialdemocracia aparecen como un peligro entre los miembros de la Convergencia, son un hecho en uno de los cuatro del "Llamamiento". Esto aparece como incoherente frente al apoyo incondicional que comunistas, socialistas (Almeyda) y el MIR brindan a las políticas del campo socialista hegemonizado por la Unión Soviética y la ausencia entre ellos de cualquier expresión crítica respecto al modelo de socialismo vigente en esos países.

En esta situación de "diálogo de sordos", más común de lo que se quisiera aceptar en política, hay que buscar entre líneas los argumentos y las posiciones que se esconden detrás de las descalificaciones mutuas que se dirigen los dos bloques. Lo común a ambos es la carencia casi total de iniciativa para producir hechos políticos y el desarme ideológico para asumir la tarea histórica que ambos ven como propia de la izquierda chilena: dirigir un bloque de fuerzas que, oponiéndose a la dictadura, luche por la democracia y abra paso al socialismo.

El cuestionamiento de los partidos por la Convergencia surge de la nueva situación imperante en Chile, pero la postulación de los nuevos actores políticos a la dirección del bloque democrático opositor no se concreta ni siquiera en un programa y menos en una estrategia de lucha por el socialismo. La crítica del sistema de partidos, y de la acción de los partidos de la izquierda dentro de él, no da lugar a otra proposición que la aceptación de las formas orgánicas y los planteamientos ideológicos

surgidos de la derrota y el repliegue posterior de la izquierda. Prueba de que este repliegue no termina aún, son estas formas orgánicas espontáneas y la indefinición ideológica que las caracteriza.

Los partidos que luchan por su supervivencia y la manutención de su influencia, aun en ausencia del sistema en el que se insertaban y en el que sus estrategias y tácticas tenían sentido, buscan afirmarse por medio de una proposición de lucha armada abstracta, carente de un sentido político concreto en las condiciones imperantes en Chile. El objetivo de esta lucha armada no es, entonces, por el momento, ni el derrocamiento de la dictadura ni la toma del poder. Se trata simplemente de afirmar y mantener la existencia y presencia en Chile de estas organizaciones.

A pesar de todo lo sombrío que pueda parecer este panorama de la división que sufre la izquierda chilena, y de las características ideológicas y las posiciones asumidas por cada uno de los bloques que hemos descrito, éste puede ser el origen de la superación de las carencias anteriores y actuales de esta izquierda. La situación en que se ha puesto cada sector le propone un conjunto de problemas teóricos que exigen una resolución previa a la maduración ideológica que les permita a cada uno remontar el retroceso sufrido a partir de la derrota de 1973, y quizás, algún día, reencontrar una unidad que todos ven como necesaria.

Como conclusión, la importancia de los problemas teóricos que enfrenta cada bloque

Quiéranlo o no, con o sin conciencia de ello, las posiciones asumidas por cada uno de estos bloques apuntan al planteamiento de problemas generales y abstractos que no aceptan una solución consistente en un juego de palabras o un ejercicio de redacción que, ocultando y postergando las definiciones, permita un acuerdo político entre distintas fuerzas.

Por otra parte, producir acuerdos entre fuerzas en ascenso es muy diferente de hacerlo entre un conjunto de elementos en retroceso a consecuencia de una derrota como la de 1973. Las necesidades de solidaridad internacional con los derrotados fueron en parte responsables de la postergación de las definiciones del significado del gobierno de la Unidad Popular. Las organizaciones políticas, y los militantes individuales de la izquierda, se encontraron luego del golpe de Estado con una variedad de interpretaciones de la experiencia chilena propuestas por distintos sectores políticos de otros países. Al respecto basta recordar las consideraciones sobre el caso chileno hechas por los eurocomunistas. Sin embargo, no era la ocasión para contradecir estas interpretaciones y, por lo tanto, todo esto reforzó el silencio acerca del proyecto representado por la Unidad Popular.

Había en el caso chileno dos temas fundamentales de discusión: 1] la vía de acceso al poder de las fuerzas que luchan por el socialismo, y 2] el tipo de socialismo a que esa vía, alternativa a las conocidas hasta ahora,

daría lugar. Hoy, en una nueva situación, los dos bloques de la izquierda enfrentan los mismos problemas. Es obvio que no son dos problemas independientes. Sin embargo, el elegir uno como eje esconde a veces la pretensión de ignorar el otro.

Durante el gobierno de la Unidad Popular las respuestas venían determinadas inmediatamente por las condiciones estructurales y coyunturales que enmarcaban al proceso político. Democracia era la vigencia del sistema institucional, pluripartidista, con elecciones periódicas, etcétera, por lo que la discusión se centraba en la preservación o no de ese sistema en los términos que ya hemos descrito. La cuestión era entonces la de la compatibilidad de los cambios económicos con la conservación del sistema político. Para unos este sistema era una traba y había que superarlo, en tanto para otros había que preservarlo sin que se supiera si como parte del proyecto estratégico como paso táctico. Esto planteaba el problema militar, en los términos que también ya hemos descrito como opción respecto del sistema institucional. Esta forma de plantearse los problemas no permitía profundizar en la definición de socialismo ya que éste aparecía reducido, en la práctica, al control estatal de la economía dejando por resolver la cuestión de su compatibilidad o no con un sistema político democrático. De la respuesta a esta última disyuntiva se deducía el papel que los medios armados desempeñarían en el proceso.

La reducción del socialismo al control estatal de la economía no ocurría sólo por razones coyunturales. Había elementos estructurales, en lo económico y lo social, que imponían esta visión. En la economía, las transformaciones propuestas en el programa de gobierno de la Unidad Popular aparecían como viables a la luz del papel del Estado en el desarrollo económico del país a partir de la década de los años treinta. En lo social, el grueso de los cuadros de los partidos de la izquierda incorporados a la administración gubernamental, provenía de una amplia clase media dependiente del mismo Estado o de instituciones financiadas por éste, por ejemplo los intelectuales empleados por las universidades. No es raro, entonces, que un cuestionamiento de la relación socialismo-estatismo estuviera fuera del horizonte teórico e ideológico de la izquierda.

De igual manera, la cuestión de la violencia se reducía a la opción práctica de buscar la mejor forma de neutralizar a las fuerzas armadas. Las posibilidades eran atraer a la institución en su conjunto a través de sus mandos, conservando e incluso reforzando su estructura, o bien atraer a su "base" a partir de su composición social y subvirtiéndolo por lo tanto su estructura.

Hoy comienzan a cambiar los términos del problema y a abrirse nuevas posibilidades. Si bien el recurso a la violencia sigue siendo considerado un medio, las opciones se ubican en el terreno político de tal manera que sus consecuencias para el proyecto social y político detrás del cual se le quiera emplear hacen que este último no pueda siquiera ser formulado. Por una parte, existe la opción de esperar que la situación nacional se degrade hasta el punto de la división de las fuerzas armadas, lo cual produciría un sec-

tor con el que se podría negociar alguna forma de reconstrucción del **sistema político**. Por otro lado, si se desecha esa posibilidad, aparece la opción de formar una fuerza militar propia que se proponga la **destrucción de las fuerzas armadas de la dictadura**.

En ambos casos el proyecto debe quedar indefinido. En el primero porque el sector de las fuerzas armadas que negocie una reconstrucción del sistema político buscará las garantías para evitar que esta reconstrucción dé lugar a un nuevo intento socialista. En el segundo, porque la proposición de enfrentamiento supone la adhesión al modelo de "socialismo realmente existente". Ninguno de estos dos proyectos reúne consenso en la izquierda y, menos aún, puede aspirar a ser hegemónico en un bloque democrático antidictatorial.

La cuestión de la compatibilidad entre socialismo y democracia ha sido planteada por la Convergencia como prioritaria. Esto coloca a sus integrantes frente al problema teórico de definir un modelo tal del socialismo. El no abordar la tarea teórica puede terminar con las posibilidades de constituir un instrumento político a partir de tal agrupación. Las posibilidades de eludir la cuestión adhiriendo a cualquier otra de las soluciones disponibles, acarrearía el fraccionamiento y, probablemente, la atomización, si no disolución de la Convergencia. Por una parte, sacrificar el contenido socialista de la lucha al contenido democrático (solución socialdemócrata) implica olvidar el socialismo en términos teóricos y entregarse desarmados ideológicamente a los elementos que dirigirían una búsqueda de salida a la situación chilena, limitada a esos objetivos. No es necesario insistir en que ningún partido socialdemócrata está haciendo ninguna transformación socialista en los países donde están en el gobierno. En Chile, el mejor candidato a subordinar a la Convergencia, si ésta asume esa alternativa, es la democracia cristiana. Por otra parte, aceptar el modelo de socialismo vigente implica minimizar el contenido democrático de la lucha, aceptando que en los países del socialismo real existe un nivel **de libertades democráticas suficiente o buscando justificaciones históricas** o de cualquier tipo a las deficiencias que se observan en este respecto. Esta segunda opción aparece como menos probable, ya que colocaría a la Convergencia en la misma posición que los cuatro del "Llamamiento".

Sobre el contenido de la democracia parece no haber cuestión en cuanto a las exigencias mínimas planteadas por la Convergencia. El problema es para ellos, entonces, definir el contenido socialista que se asociaría con las libertades democráticas que especifica su declaración. Esto les plantea como tarea romper la identidad socialismo-estatismo, sobre la cual ha descansado la ideología de la izquierda chilena históricamente.

El hecho de que la Convergencia haya apuntado hacia este problema no garantiza que lo pueda solucionar. Sin embargo, su subsistencia, en las condiciones actuales, dependerá de que lo enfrente o no. Enfrentarlo implica no sólo definiciones teóricas sino, desde el comienzo, un trabajo crítico que impone definiciones políticas en tanto no es posible definir un socialismo democrático sin una crítica al socialismo existente. Por otra

parte, los miembros de la Convergencia tienen también una historia de la que dar cuenta. Romper con una concepción estatista del socialismo implica aclarar el sentido del desarrollo de la izquierda en el sistema político chileno que culmina con el gobierno de la Unidad Popular, del cual los miembros de la Convergencia formaron parte .

Los cuatro partidos del "Llamamiento" no se sienten obligados a participar en la discusión propuesta por la Convergencia. Sin embargo, su definición rupturista y su adhesión a las formas militares de lucha les planteará muy pronto, si son serios en sus definiciones, el problema de la política militar. Si, como hemos descrito, la lucha armada es vista teóricamente como "la continuación de la política por otros medios", pero se la adopta para sobrevivir como organizaciones y como influencia ideológica sin plantear una política que se traduzca en un programa común, entonces, o bien el medio se impone a los fines o no se avanza hacia ningún lado. De hecho, los partidos del "Llamamiento" enfrentan el problema de definir su relación con el eventual aparato armado que enfrente a la dictadura. Esto implica una política militar en que las acciones armadas sean parte (no un medio) de una estrategia y una táctica que surjan de las condiciones existentes. De otra manera los aparatos armados de cada partido permanecerán aislados y pueden desarrollar todo tipo de deformaciones militaristas. La existencia de la Convergencia es en parte producto del enfrentamiento dentro de los partidos de formas embrionarias de tendencias militaristas.

Las formas militares de lucha no son independientes de la concepción de socialismo que se plantea como meta estratégica de ellas. Sin embargo, es claro que entre los cuatro del "Llamamiento" no hay consenso en cuanto a la finalidad de la lucha. No enfrentar estas definiciones puede acarrear que el desarrollo de la acción militar resulte no en un fortalecimiento de este bloque sino en su ruptura. En las condiciones actuales, el MIR es el único de los cuatro que tiene solucionado el problema de las relaciones entre mando político y mando militar, lo cual no augura buen desarrollo al conjunto puesto que antes que la hegemonía del MIR en el bloque parece más probable su ruptura o alguna forma de reacomodo de sus fuerzas componentes. Por otra parte, la fuerza militar que eventualmente pueda desarrollar este bloque no parece muy bien armada en el terreno ideológico para enfrentar una competencia por la influencia en las masas. Esto hace depender su capacidad de desarrollo de los medios técnicos de que disponga para llegar a ser militarmente una alternativa a la dictadura.

Como se puede apreciar, la división de la izquierda chilena es un hecho grave que muestra un movimiento de retroceso inesperado para quien lo haya visto hasta ahora como recuperándose después de la derrota. Los problemas teóricos que se plantean a cada uno de los bloques en que se ha dividido son generales, pero surgen de una situación concreta. Es en esa misma situación concreta donde se debe buscar los elementos para responder a ellos. Las alianzas que se forjen barajando fórmulas abstractas que eviten o posterguen las definiciones no están destinadas a perdurar.

Es claro que ese tipo de alianzas es paralizante y ayuda a perpetuar la situación actual, en la cual la dictadura tiene prácticamente el monopolio de la producción de hechos políticos.

Buscar solución a estos problemas es una tarea impostergable para cada partido de la izquierda chilena. La única fuente confiable en la que pueden hurgar es su propia historia. Esto les plantea revisar su papel en el sistema político chileno antes de 1973 y el sentido de su participación en el gobierno de la Unidad Popular. La clarificación de posiciones respecto de estos puntos puede producir nuevas escisiones, pero, en el largo plazo, puede fortalecer alternativas claras para el presente y el futuro. Ignorar estas cuestiones no producirá la unidad y, por el contrario, postergará la creación y fortalecimiento de los instrumentos políticos necesarios para enfrentar la dictadura.